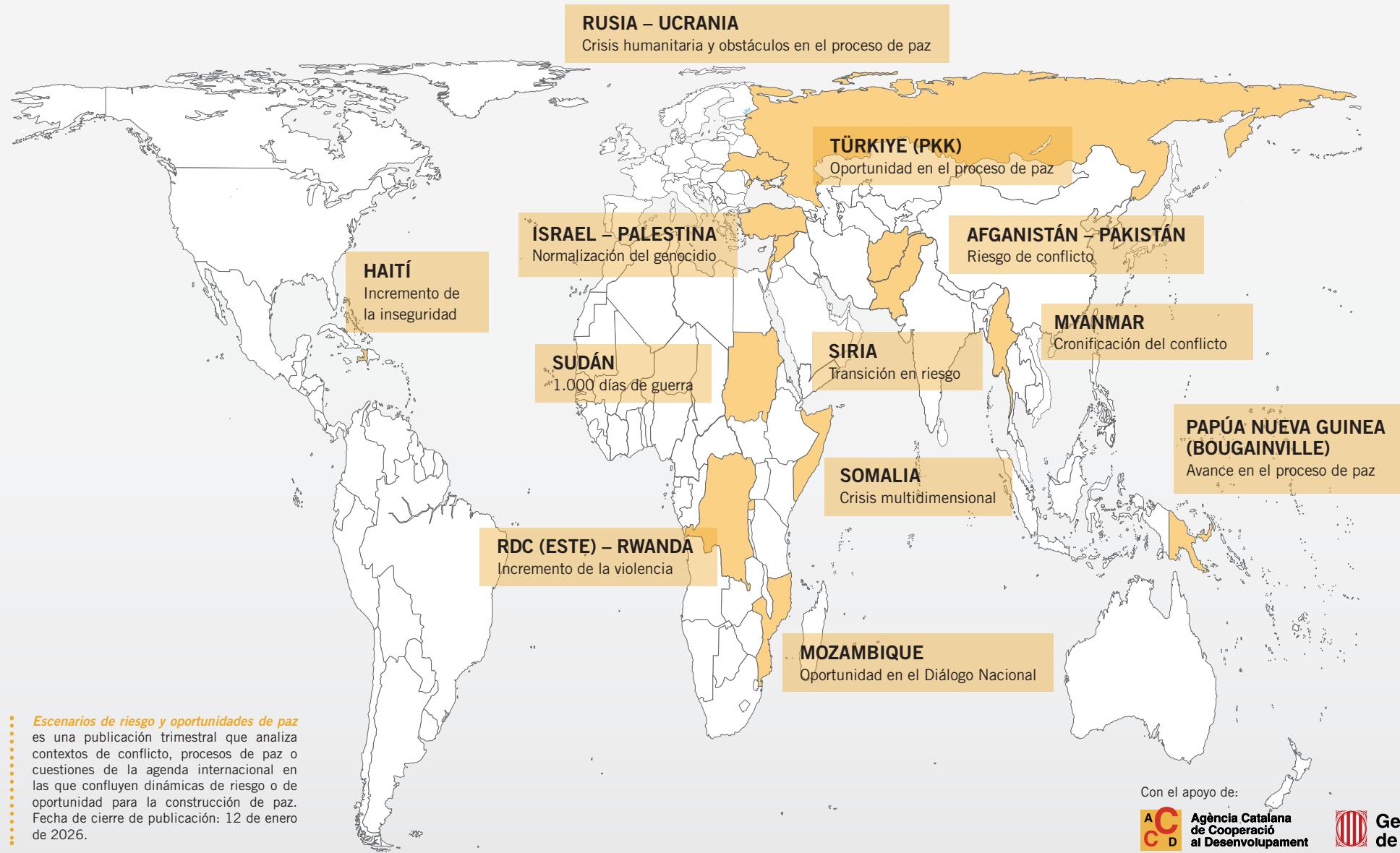


Escenarios de riesgo y oportunidades de paz para 2026

Enero de 2026



Con el apoyo de:

Escenarios de riesgo y oportunidades de paz es una publicación trimestral que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o cuestiones de la agenda internacional en las que confluyen dinámicas de riesgo o de oportunidad para la construcción de paz. Es una herramienta analítica que integra la perspectiva de género interseccional y que pretende ser un recurso útil para actores educativos y políticos y la ciudadanía en su conjunto, contribuyendo a la comprensión de estos contextos y a la acción temprana. Este número analiza algunos escenarios de riesgo y oportunidades de paz para 2026. Fecha de cierre de publicación: 12 de enero de 2026.

Casos analizados:

ÁFRICA

MOZAMBIQUE: El Diálogo Nacional Inclusivo como oportunidad de estabilidad y cambio

RDC (ESTE) – RWANDA: El fracaso de la mediación de EEUU y la creciente implicación regional evidencian una escalada del conflicto

SOMALIA: Ante el riesgo de colapso y la toma del poder por al-Shabaab

SUDÁN: Una guerra cada vez más difícil de contener

AMÉRICA

HAITÍ: El reto de la inseguridad ante las elecciones y el despliegue de una nueva misión internacional

ASIA

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El riesgo de una confrontación a gran escala

MYANMAR: La cronificación y regionalización del conflicto armado

PAPÚA NUEVA GUINEA: Los avances en el proceso de paz y en la negociación sobre el estatus político de la isla de Bougainville

EUROPA

RUSIA – UCRANIA: El riesgo de una mayor brecha entre necesidades humanitarias y fondos, y los obstáculos en el proceso de paz

TÜRKIYE (PKK): La oportunidad de consolidar y ampliar el proceso de paz

ORIENTE MEDIO

ISRAEL – PALESTINA: El riesgo de normalizar (aún más) el genocidio, el apartheid y la vulneración del derecho internacional

SIRIA: Retos de seguridad y gobernanza amenazan la transición en el país



Graffiti en las calles de Maputo, junio 2025. Fuente: Escola de Cultura de Pau

MOZAMBIQUE

El Diálogo Nacional Inclusivo como oportunidad de estabilidad y cambio

Mozambique atraviesa una de las crisis políticas y de derechos humanos más profundas de su historia reciente. Tras las controvertidas elecciones generales de octubre de 2024, que resultaron en la victoria oficial de Daniel Chapo del partido gobernante Frelimo, pero que estuvieron plagadas de acusaciones de fraude y una represión violenta que dejó cientos de muertos y miles de personas heridas y detenidas, el país ha intentado canalizar el descontento a través de la creación del llamado Diálogo Nacional Inclusivo.

Si bien no es la primera vez que en el país se registran movilizaciones y violencia en el marco de la celebración de comicios –las elecciones de 2014 y 2019 registraron episodios similares, aunque con movilizaciones más reducidas y localizadas, y una respuesta más contenida por parte de los cuerpos de seguridad– la intensidad de estas en 2024 sugiere una creciente frustración popular ante la falta de alternancia y de canales democráticos eficaces para la expresión política.

En este sentido, ante el riesgo de un colapso total, el presidente Chapo, tras su investidura en enero de 2025, optó por una vía pragmática. El proceso de diálogo nacional puesto en marcha se presenta como una oportunidad para reformar las estructuras del Estado y evitar un colapso social definitivo, siempre y cuando el diálogo sea inclusivo, honesto y no se instrumentalice

por la administración de Chapo para ganar tiempo en su legislatura. Si no se introducen reformas profundas, el sistema podría continuar deslegitimándose, con el consiguiente riesgo de nuevas oleadas de violencia, mayor fragmentación social y retrocesos democráticos.

Puesta en marcha del Diálogo Nacional Inclusivo y surgimiento de Anamola

El 5 de marzo de 2025, los nueve partidos con representación parlamentaria –incluyendo al gobernante Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo) y los opositores Resistencia Nacional Mozambiqueña (Renamo), el Partido Optimista para el Desarrollo de Mozambique (Podemos) y el Movimiento Democrático de Mozambique (MDM)– firmaron el Compromiso Político para la creación del Diálogo Nacional Inclusivo. Un mes después, este se tradujo en la [Ley de Compromiso Político aprobada por unanimidad en sede parlamentaria](#).

El diálogo se articula a través de una Comisión Técnica de 21 miembros: dos representantes por cada uno de los nueve partidos firmantes y tres de la sociedad civil. Esta comisión técnica supervisará el trabajo de 10 subgrupos temáticos, formados por los partidos políticos con representación parlamentaria y por miembros de las diferentes instituciones del Estado, que trabajarán

en torno a diferentes temas, entre ellos, la reforma de la Constitución, la reforma fiscal, la reforma del sistema político y la promoción de la reconciliación, temas que corresponden a algunos de los subgrupos establecidos. Las decisiones elaboradas por los subgrupos temáticos serán revisadas por la comisión técnica y posteriormente serán presentadas en la Asamblea Nacional y al Ejecutivo del país. El 10 de septiembre inició oficialmente el proceso de Diálogo Nacional en el país, que se prevé se extenderá hasta noviembre de 2026.

A pesar de contar con el respaldo económico de la Unión Europea y de países como Suiza, el proceso se enfrenta de entrada al reto de la legitimidad, especialmente debido a la exclusión inicial del principal actor de la oposición, Venâncio Mondlane, que no estaba integrado en la estructura parlamentaria al momento de la aprobación de la estructura del diálogo y, por lo tanto, quedó excluido de la Comisión Técnica. Mondlane, quien se había presentado a las elecciones presidenciales de octubre de 2024 bajo el partido Podemos, había quedado en segundo lugar y, posteriormente, había roto con Podemos, acusando al partido de “venderse” por haber tomado escaños en la legislatura a pesar de los llamamientos al boicot por denuncias de fraude electoral.

Sin embargo, la ausencia inicial de Mondlane en la Comisión Técnica que guía el diálogo se podría subsanar tras la autorización del Ministerio de Justicia a registrar su nuevo partido, denominado *Anamola* (Alianza Nacional para un Mozambique Libre y Autónomo), hecho que se produjo a finales de año. De hecho, el partido, el 25 de noviembre, presentó propuestas al comité nacional de diálogo, incluyendo la revisión de la Constitución y el órgano electoral, y el 10 de diciembre volvió a pedir que se le incluyera formalmente en el Diálogo Nacional. Frente a su exclusión inicial, Anamola anunció en octubre de 2025 un movimiento de consulta popular paralela. Utilizando herramientas digitales, el partido busca recoger las demandas ciudadanas para presentarlas como propuestas de reforma, incluyendo el escrutinio parcial online para aumentar la transparencia electoral y la limitación de los poderes presidenciales.

El surgimiento de Anamola ha representado uno de los fenómenos políticos más disruptivos de 2025 en el país, y ha consolidado la figura de Mondlane como el principal líder de la oposición extraparlamentaria. Por ello, su participación en el diálogo se observa capital para dotar de mayor legitimidad al mismo, permitiendo incluir la voz de la fuerza política que, en la actualidad, representa el sentimiento de cambio de la juventud.

Agenda paz y seguridad

Por otro lado, el Dialogo Nacional, si bien se centra en la crisis política nacional desatada tras las elecciones

de 2024, también representa una oportunidad para abordar los *problemas de paz y seguridad que arrastra el país*. Tras la finalización oficial a finales de 2024 de la implementación del acuerdo de paz con la Renamo firmado en 2019, los principales retos en materia de paz y seguridad a los que se enfrenta el país se podrían reducir a dos grandes desafíos. Por un lado, cumplir con las promesas de descentralización, reintegración y reconciliación previstas en el acuerdo de paz para evitar una recaída en el conflicto. Por otro, poner fin a la violencia que azota la provincia norteña de Cabo Delgado desde finales de 2017. En este sentido, si bien hasta la fecha los diferentes ejecutivos mozambiqueños se habían negado a entablar conversaciones de paz con la insurgencia, en septiembre el presidente Chapo y otros funcionarios hablaron por primera vez de un posible diálogo que complementase los esfuerzos militares para resolver el conflicto. En esa misma línea, Valige Tauabo, gobernador de Cabo Delgado, fue más allá e *invitó a la insurgencia yihadista a expresar sus quejas a través del proceso de Diálogo Nacional*, que incluye consultas a nivel nacional con representantes de la sociedad civil. También el exmandatario Armando Guebuza ha insistido en que el espíritu del diálogo nacional debe extenderse a la insurgencia del norte para lograr una paz territorial completa.

El Diálogo Nacional Inclusivo se presenta como una gran oportunidad para realizar reformas estructurales en el país

Previsiones del Dialogo Nacional Inclusivo: ¿Estabilidad y Reformas?

El año 2026 se perfila como el “momento de la verdad” para Mozambique, donde se pondrá a prueba si el Diálogo Nacional Inclusivo es una herramienta real de transformación o una táctica dilatoria del Frelimo. Hasta ahora, el Diálogo ha generado diferentes hitos positivos. Por un lado, ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar las facultades presidenciales para descentralizar el poder, una demanda histórica de la oposición para reducir la hegemonía del Frelimo. Por otro, como gesto de buena voluntad, la ley de abril de 2025 permitió la concesión de indultos a cientos de jóvenes detenidos durante los disturbios postelectorales, lo que ayudó a rebajar la tensión en las calles, aunque aún quedan muchas personas en prisión. Asimismo, y a diferencia de procesos anteriores que solo involucraban a las élites armadas (como los acuerdos con Renamo), el diálogo está tratando de integrar a plataformas juveniles y organizaciones de la sociedad civil para asegurar que la “inclusión” no fuera solo retórica, sino operativa en la gobernanza local.

Se espera que 2026 sea el año en que las recomendaciones del diálogo se traduzcan en cambios legislativos concretos. Un evento clave en el calendario es el Congreso de Justicia de 2026, que el Ministerio de Justicia ha calificado como “crucial” para el diálogo inclusivo. En este congreso se debatirán reformas al sistema judicial para garantizar que las instituciones del Estado sean percibidas como neutrales por todos los actores políticos.

Sin embargo, el riesgo de fragmentación sigue presente. Su éxito dependerá de la capacidad de mantener a Venâncio Mondlane y a la base joven de Podemos dentro del marco institucional. Si las promesas de reforma constitucional se dilatan, la calma actual podría ser solo una tregua temporal. Asimismo, y a pesar de los avances políticos, 2026 seguirá marcado por una severa crisis humanitaria. Organismos como OCHA y UNICEF estiman que **1,8 millones de personas requerirán asistencia crítica** debido a los desplazamientos forzados provocados por la insurgencia en Cabo Delgado y los impactos recurrentes del cambio climático. La gestión de esta crisis será determinante para mantener la estabilidad. Además, el panorama electoral en el resto de África Subsahariana durante 2026, con elecciones en países vecinos y una tendencia al atrincheramiento de los partidos históricos, pondrá a prueba la “excepción mozambiqueña” de diálogo.

Conclusión

El Diálogo Nacional Inclusivo en Mozambique ha logrado lo que parecía imposible en enero de 2025: sentar a adversarios acérrimos en una mesa de negociación legítima. La estabilidad de Mozambique en 2026 dependerá de la capacidad del sistema para integrar las voces disidentes, como la de Anamola, y de pasar de la fase de “escucha” y “mesas redondas” a la fase de implementación estructural de reformas. El reto no es solo aprobar nuevas leyes, sino demostrar si Frelimo está realmente dispuesto a ceder parcelas de poder real en favor de una gobernanza más inclusiva. La estabilidad a largo plazo del país no dependerá de las cifras de crecimiento del PIB, sino de la capacidad del sistema para convencer a la juventud mozambiqueña de que sus voces pueden generar cambios a través del voto y el diálogo. Si el Diálogo Nacional Inclusivo falla en ofrecer una inclusión real y cambios estructurales, el riesgo de nuevas oleadas de violencia y una mayor deslegitimación democrática seguirá siendo una amenaza latente para el país. Mozambique tiene en 2026 la oportunidad de demostrar que el diálogo es una herramienta de transformación, no solo una táctica de supervivencia política.



Presidente Donald Trump junto a sus homólogos de DRC y Rwanda, Félix Tshisekedi y Paul Kagame, 4 de diciembre de 2025. Fuente: Official White House Photo / Daniel Torok

RDC (ESTE) – RWANDA

El fracaso de la mediación de EEUU y la creciente implicación regional evidencian una escalada del conflicto

El año 2026 se inicia con una nueva ofensiva militar en el este de la República Democrática del Congo (RDC), tal y como sucedió en la primavera de 2025, aunque diferentes elementos ponen de manifiesto una posible escalada del conflicto. A principios del año 2025, tras la caída de Goma y Bukavu (capitales de Kivu Norte y Kivu Sur, respectivamente) en manos del grupo armado M23 y Rwanda y la evidencia del **fracaso de las iniciativas diplomáticas regionales anteriores para poner fin al conflicto** (impulsadas por la UA y la EAC), Qatar y EEUU iniciaron conversaciones y canales de diálogo con Rwanda, RDC y el M23 de cara a detener las hostilidades. Estas negociaciones abrieron una **ventana de oportunidad** en el conflicto prolongado que padece el este de la RDC. En junio de 2025 RDC y Rwanda firmaron un acuerdo que debía sentar las bases de un proceso para poner fin al conflicto. No obstante, persistieron los enfrentamientos y a principios de diciembre los presidentes congolés y ruandés se reunieron nuevamente en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, para ratificar el acuerdo de junio, conocido como el Acuerdo de Washington.

Sin embargo, a los pocos días se reanudaba la ofensiva del M23, lo que evidenciaba la poca credibilidad del compromiso y la nula confianza de las partes en el acuerdo y daba nuevamente al traste con las esperanzas suscitadas

por la iniciativa qatarí-estadounidense en la población civil afectada por el conflicto. La creciente implicación de Burundi en apoyo de la RDC y el papel de Rwanda en apoyo del M23 hacen temer para 2026 una escalada de la situación de desastrosas consecuencias para la región.

El proceso de mediación de Qatar y EEUU

El conflicto que padece el este de RDC se remonta a mediados de los años noventa del siglo XX. A finales de 2021 se había agravado el conflicto como consecuencia de la ofensiva perpetrada por el grupo armado M23 argumentando el incumplimiento de todos los compromisos y acuerdos previos. Este grupo toma su nombre de la fecha de la firma de un acuerdo entre el antiguo movimiento político-militar CNDP y el Gobierno congolés el 23 de marzo de 2009, por el que este grupo se comprometía a desmovilizarse a condición del reconocimiento de los derechos y la protección de la minoría a la que defiende y de la que forma parte, la comunidad tutsi banyamulenge de RDC. El acuerdo también contemplaba la desarticulación y repatriación –según acuerdos previos, incumplidos– del grupo armado FDLR, parte de cuyos responsables participaron en el genocidio de Rwanda de 1994, amenaza que sigue sirviendo hoy en día a Rwanda para justificar su apoyo al M23 y su intervención unilateral en

RDC vulnerando el derecho internacional. Desde el inicio de esa ofensiva hasta finales de 2025, se han alcanzado al menos seis treguas que colapsaron en cuestión de días o semanas. Desde entonces, tanto la UA, liderada por Angola, como la EAC, liderada por Kenia, han intentado, sin éxito, llevar a cabo diversas iniciativas diplomáticas acompañadas de operaciones militares regionales en apoyo de las Fuerzas Armadas congoleñas (Fuerza Regional de la EAC; y SAMIDRC, Fuerza regional de la SADC) junto a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (MONUSCO) para intentar promover un alto el fuego y la separación de las fuerzas contendientes. El fracaso de estas dos operaciones junto al descrédito estructural de la MONUSCO –que está llevando a cabo una retirada pactada en fases desde inicios de 2024, y ya ha abandonado Kivu Norte y Kivu Sur– contribuyó al vacío de poder que el M23 y Rwanda están aprovechando para ampliar su control territorial.

El 18 de marzo de 2025, los presidentes Félix Tshisekedi y Paul Kagame, con la mediación del emir de Qatar, firmaron una declaración conjunta en Doha en la que hacían un llamamiento a un alto el fuego inmediato, siendo el primer contacto directo de ambos presidentes en tres años. Poco después, el 25 de abril, los ministros de Exteriores de los dos países firmaron en Washington una “declaración de principios” bajo los auspicios de EEUU, y se comprometieron a redactar un acuerdo de paz antes del 2 de mayo, aunque cumplida esa fecha no se había alcanzado. Mientras tanto, los enfrentamientos y la violencia continuaban, así como los desplazamientos de población y la violencia sexual.

El acuerdo llegaba en junio. El 27 de junio, los ministros de Exteriores de Rwanda y de RDC firmaban un acuerdo ante Donald Trump, que incluía la retirada de tropas ruandesas del territorio congolés, la cooperación en seguridad (creación de un mecanismo de coordinación de seguridad conjunta en el plazo de 30 días) y el establecimiento de mecanismos de integración económica regional (en un plazo de 90 días, según el cual EEUU compraría minerales en ambos países). La RDC debía facilitar el desmantelamiento de las FDLR, y luego Rwanda retiraría sus tropas desplegadas en la RDC y pondría fin a su apoyo al M23. Este acuerdo, sin embargo, no incluía directamente al M23, lo que limitaba su alcance ante la continuidad de la violencia en el terreno.

En paralelo, en julio la RDC y el M23 firmaban en Doha, Qatar, una declaración de principios que establecía un alto el fuego y un proceso hacia un acuerdo de paz integral. Las conversaciones, apoyadas por Qatar, EEUU y la Cruz Roja, incluían la creación de mecanismos de monitoreo del cese de hostilidades y el intercambio de prisioneros. A pesar de los esfuerzos e iniciativas, los plazos para alcanzar pasos concretos se incumplieron, y la violencia continuó, lo que evidencia la fragilidad de los acuerdos y la poca voluntad política para ponerlos en marcha por parte de todos los actores implicados. Esta declaración de principios debía concretarse en un acuerdo global entre la RDC y el M23

en conversaciones que estaba previsto que se iniciaran como máximo entre el 8 y el 18 de agosto, cosa que no sucedió. Las conversaciones en Qatar se reanudaron el 26 de agosto, centradas en la implementación de un alto el fuego y el intercambio de prisioneros, sin avances y con la continuidad de los enfrentamientos.

El 14 de octubre las delegaciones de Kinshasa y del M23 se reunieron nuevamente en Qatar –la sexta ronda de conversaciones– acordando un mecanismo de monitoreo del alto el fuego, lo que se consideraba una precondición para un acuerdo global. En paralelo, el 1 de octubre Kinshasa y Kigali acordaron el inicio del plan de neutralización de las FDLR. El 15 de noviembre las delegaciones del Gobierno congolés y del M23 se reunieron nuevamente –séptima ronda de conversaciones– y firmaron el documento-márcos general para un acuerdo global, pero no se llevaron a cabo las medidas de confianza necesarias para iniciar la puesta en marcha del acuerdo, como la liberación de prisioneros y los primeros pasos para el desarme del grupo, tal y como señalaba el International Crisis Group. El documento-márcos general omitía temas centrales como el futuro de los oficiales del M23 y la exigencia del M23 de un diálogo nacional. El 7 de noviembre los EEUU anuncian que Kinshasa y Kigali comenzaban a elaborar el marco de integración económica regional, pero su implementación permanecía parada, ya que previamente debía ponerse en marcha el conocido como Concept of Operations (CONOPS), acordado en Luanda en octubre de 2024 y que formaba parte del marco de acuerdo firmado en junio de 2025. A finales de noviembre se confirmaba que los presidentes congolés y ruandés se reunirían en Washington con Trump el 4 de diciembre para ratificar el acuerdo de junio, ahora llamado el Acuerdo de Washington. Así, el 4 de diciembre se repetía la fotografía de junio.

La ofensiva del M23 y Rwanda evidencia el fracaso diplomático de EEUU

Fracaso del acuerdo de diciembre y escalada de la ofensiva del M23

A los pocos días de la firma del acuerdo entre los presidentes de RDC y Rwanda con el apoyo de Trump, más de 200.000 personas huían de los graves enfrentamientos que se continuaban produciendo en Kivu Sur, y en especial en Kamanyola, y posteriormente en Uvira, importante ciudad cercana a la frontera común entre RDC, Rwanda y Burundi, que finalmente cayó en manos del M23. El M23 anunció a los pocos días su retirada de Uvira tras la intervención de la mediación estadounidense. A finales de año el Gobierno congolés elevaba a 1.500 la cifra de víctimas mortales y a 500.000 las personas desplazadas como consecuencia de la violencia en las localidades alrededor de Uvira y hacia el sur (territorio de Fizi y Kalemie), cifras no confirmadas por fuentes independientes y que evidenciaban una evolución negativa de la situación en los próximos meses. Alrededor de 100.000 personas huyeron a Burundi según ACNUR, organización que ha alertado de la muerte de al menos 50 personas en los campos de personas refugiadas debido a la catastrófica situación humanitaria. Además, se demostró

una creciente implicación de Burundi en apoyo de la RDC para frenar los avances del M23. **Diversos análisis** señalan que la implicación de Burundi –la caída de Goma y Bukavu privó al Gobierno congolés de acceso militar aéreo a la región, que Burundi compensó brindándoselo vía Bujumbura, cercana a la localidad de Uvira, fronteriza con Burundi– y las acusaciones de RDC a Rwanda del envío de otros tres batallones a RDC no presagian una evolución positiva de la situación para 2026. A toda esta grave situación humanitaria y a la escalada de la confrontación bélica tras la firma del acuerdo de diciembre se añaden informaciones sobre la creciente militarización de la frontera común entre Burundi y Rwanda, que podría suponer la apertura de un nuevo frente militar en 2026 y una confrontación directa entre ambos países, lo que agravaría todavía más, si cabe, este conflicto.

El fracaso diplomático de EEUU era previsible dada la histórica desconfianza de las partes ante el incumplimiento sistemático de los diferentes acuerdos de paz y la inexistencia de mecanismos implementación y sanciones ante las violaciones de los acuerdos. Sin embargo, en un primer momento había parecido que la existencia de un garante de la tala de EEUU, per se, y los intereses en la explotación de los recursos naturales congoleños por parte de EEUU podía ser un incentivo para que EEUU se comprometiera claramente en el avance de estas negociaciones, lo que podía abrir una ventana de oportunidad real para iniciar un punto de inflexión. Está por ver si EEUU en 2026 mantendrá su interés y presión de cara a forzar el cumplimiento de los acuerdos

alcanzados hasta la fecha en RDC y así evitar una escalada de la situación.

El avance de la ofensiva del M23 y Rwanda ha evidenciado nuevamente que las iniciativas diplomáticas de alto nivel deben ir vinculadas a un acompañamiento constante, esfuerzos de presión, amenazas de sanciones y mecanismos claros y creíbles de rápida implementación para conseguir cambios reales. Concretamente, el establecimiento de un alto el fuego verificable; el cumplimiento de algunas precondiciones necesarias para el establecimiento de este cese de hostilidades como es la puesta en marcha de los mecanismos –comisiones de seguimiento, diseño del mecanismo militar que supervisará el alto el fuego (es decir, la concreción de las características y mandato de la operación, cifras de tropas y países que participarán en la operación militar, así como etapas y periodo de despliegue)– para implementar la supervisión o monitoreo del futuro alto el fuego.

Y estos pasos, de cumplirse, tampoco resolverían muchas de las causas profundas que se encuentran en la **génesis de este conflicto**. Es imprescindible abordar los **factores históricos, sociales, económicos y políticos** que han convertido el este de la RDC en un escenario recurrente de guerra. Sin embargo, estas cuestiones, así como la participación efectiva de la sociedad civil, han sido consideradas secundarias hasta ahora en las mesas de negociación sobre el conflicto en RDC, pese a su potencial para contribuir decisivamente a que un proceso de estas características realmente sea sostenible y duradero.



Reunión del Consejo de Seguridad sobre Somalia. Fuente: Naciones Unidas

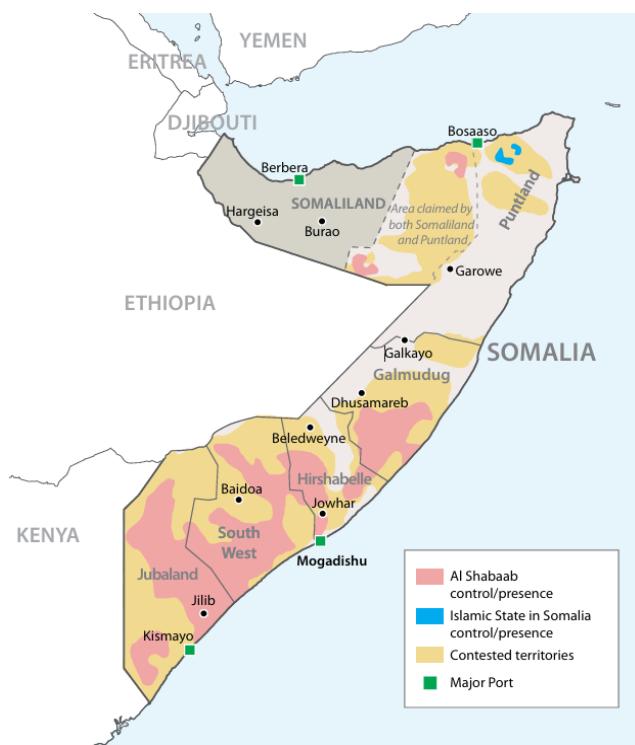
SOMALIA

Ante el riesgo de colapso y la toma del poder por al-Shabaab

En la última década la evolución de la situación en Somalia se ha caracterizado por lentos avances y retrocesos en el ámbito político, principalmente en el marco del difícil proceso de elaboración de la Constitución, las tensiones entre el Gobierno Federal y los estados federados –en especial, con Yubalandia y Puntlandia–, las crisis vinculadas a los procesos electorales –de carácter indirecto, y tachados de fraudulentos, y que en 2026 tendrán un nuevo capítulo con el fin del mandato del presidente Mohamud, sus intentos de perpetuarse en el poder y la transición de elecciones indirectas hacia elecciones con arreglo al principio de un voto por persona.

Otros factores de crisis han incluido las tensiones en relación con Somalilandia y las disputas a nivel regional con Etiopía; y el conflicto armado, en el que el Gobierno Federal y sus aliados locales, junto al apoyo de la misión de la UA en el país¹ y aliados internacionales, han intentado hacer frente a la ofensiva del grupo armado islamista al-Shabaab y progresivamente parecían haber incrementado parcialmente su control sobre parte del centro y sur del país.

Sin embargo, en los últimos tiempos Somalia se encuentra sumida en una crisis cada vez más profunda que incluye



Áreas en disputa en Somalia. Fuente: African Center for Strategic Studies

1. La Misión de la UA en el país era conocida como AMISOM hasta 2022, cuando fue sustituida por la misión de transición ATMIS, y en enero de 2025 fue reemplazada por la AUSSOM, misión que actualmente se encuentra en proceso de retirada gradual.

una **insurgencia yihadista en ascenso**, una operación africana que en este proceso de transición hacia una retirada definitiva está evidenciando un nuevo fracaso de la comunidad internacional, un clima de polarización política interna y una creciente competencia geopolítica regional junto a Etiopía, Egipto, Türkiye y los países de la Península Arábiga. A todo ello se ha sumado el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel y sus consecuencias a nivel regional e internacional. El control de facto del Gobierno Federal se limita a Mogadiscio y algunas ciudades satélite, con un **Ejército desmoralizado e ineficaz**. Diferentes análisis alertan que, de no producirse un cambio drástico de rumbo, los escenarios probables a corto plazo podrían incluso incluir el colapso del Gobierno Federal y la toma de la capital, Mogadiscio, por parte de al-Shabaab, con profundas consecuencias para la estabilidad y la seguridad regionales.

La creciente amenaza de al-Shabaab

El **grupo armado Harakat Al-Shabaab Al-Mujahideen (al-Shabaab)** fue fundado a principios de los años 2000 por sectores islamistas somalíes, parte de ellos miembros del movimiento islamista Al-Ittihad Al-Islamiya (AIAI), grupo que pretendía imponer la Sharia en todo el Cuerno de África con apoyo de Arabia Saudita. Tras la caída de la Unión de los Tribunales Islámicos en 2007, su milicia, al-Shabaab, se erigió como alternativa de poder al Gobierno Federal. Al-Shabaab tiene una ideología salafista militante y pretende la consecución del poder en Somalia con el objetivo de establecer un Estado y una sociedad basada en una interpretación rigurosa de la Sharia. Sin embargo, existe un debate en torno a sus objetivos (nacionales, regionales y/o globales), ya que sus acciones tienen una dimensión principalmente local y regional, pero su discurso oficial le sitúa en una esfera de influencia global. El crecimiento de al-Shabaab se ha producido en la medida en que los Estados occidentales y sus aliados en la región desarrollaron políticas securitarias para contener y erradicar al grupo, **según análisis**. Esas políticas parecen haber sido disfuncionales y han fomentado la influencia de esta organización dentro de la sociedad somalí, contribuyendo a su fama entre la tendencia yihadista global.

En la actualidad, se estima que al-Shabaab cuenta con entre 7.000 y 12.000 combatientes, y dispone de mecanismos de financiación diversos que le reportan al menos 150 millones de dólares anuales, según el Grupo de Expertos de la ONU sobre Somalia. El Grupo destacaba que la insurgencia mantenía una sólida base financiera gracias a sus muy sofisticadas estrategias comerciales, explotando medios tanto lícitos como ilícitos para generar ingresos para sus operaciones, como los puestos de control, la extorsión de empresas y los impuestos forzados, así como empresas y cuentas de terceros. En este sentido, el Grupo de Expertos señalaba en noviembre de 2025

que la amenaza que el grupo representa no se limita a las consecuencias que tienen sus acciones militares convencionales y la guerra asimétrica que practica, sino que también comprende sofisticados métodos de extorsión y reclutamiento forzoso y un eficaz aparato de propaganda. La influencia que ejerce al-Shabaab sobre la población y su capacidad para generar ingresos también rebasan las zonas en las que está presente.

Diversos análisis han señalado que **al-Shabaab ha ido aproximando posiciones hacia Mogadiscio** y tomando localidades estratégicas en la primera mitad de 2025, y que desde 2023 se ha identificado un repunte de la violencia vinculada al grupo, relacionada con la ofensiva que el presidente somalí Hassan Sheik Mohamud lanzó tras su victoria electoral en 2022. En 2023 esta ofensiva habría provocado un repliegue estratégico del grupo armado que ahora se estaría revirtiendo. El **African Center for Strategic Studies (ACSS)** señaló que las 6.224 muertes relacionadas con al-Shabaab durante el 2025 duplicaron las de 2022. Además, la fuerza de al-Shabaab refleja la debilidad del Estado somalí. En un discurso ante el Parlamento en noviembre de 2025, el jefe de las Fuerzas de Defensa, general Odowaa Yusuf Raage, reveló que entre 10.000 y 15.000 soldados habían muerto o resultado heridos en combate en los últimos tres años. El Ejército Nacional Somalí (ENS) adolece de numerosos problemas, como un

liderazgo deficiente, corrupción, niveles de entrenamiento desiguales y una dependencia de clanes considerados leales al presidente en ejercicio, en lugar de ser una fuerza con un carácter genuinamente nacional. Esto ha dejado al Gobierno Federal en una fuerte dependencia de la AUSSOM para su seguridad, misión que a su vez está sometida a un proceso de reducción.

Por otra parte, el centro de estudios ACSS destacó que las capacidades del grupo se han expandido en el último año debido a una relación de cooperación cada vez mayor con los al-houthistas de Yemen. Esta cooperación se ha traducido en la mejora del material (incluidos drones y misiles balísticos) y el entrenamiento de al-Shabaab, lo que se cree que ha contribuido directamente al éxito de sus operaciones ofensivas en el centro y sur de Somalia. Desde noviembre de 2023, se han producido 47 incidentes relacionados con la piratería en el Golfo de Adén y el Océano Índico Occidental. Además de los ataques con misiles de los al-houthistas contra buques en el Mar Rojo, la piratería organizada por al-Shabaab ha afectado gravemente el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Bab al Mandab y ha causado miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un aumento de los costos. Entre febrero y octubre de 2025, se produjo el desplazamiento de más de 300.000 personas como consecuencia de la guerra en el país.

La evolución de Estado Islámico en Somalia (ISS) ha contribuido a agravar esta situación. En 2012 se escindió

una facción de al-Shabaab dando lugar a ISS, con base en las zonas montañosas de Puntlandia, a la que al-Shabaab ha perseguido para mantener su preeminencia. ISS ya disponía de unos 1.000 combatientes en 2025. ISS ha establecido en Somalia una base administrativa y financiera de ISIS a nivel global. En este sentido, también se ha producido un aumento sin precedentes de los ataques de ISS en Puntlandia durante el último año, con un saldo estimado de 1.065 víctimas mortales. En años anteriores, las víctimas mortales relacionadas con ISS fueron inferiores a 100. La mayor parte de esta actividad estuvo relacionada con las operaciones de las fuerzas de seguridad de Puntlandia contra ISS en las montañas de Cal-Miskaad, con el apoyo de ataques aéreos de EAU y EEUU.

En conclusión, el desarrollo de los acontecimientos en los próximos meses puede determinar el futuro del país,

en particular en torno a la reducción de la presencia de la operación africana AUSSOM, la evolución de las operaciones militares y las tensiones internas relacionadas con el proceso electoral y el desgaste derivado de la polarización entre el Gobierno Federal y los estados federados. Esto podría suponer que al-Shabaab aproveche las debilidades del Gobierno Federal para profundizar en su control del país y, eventualmente, un intento de toma de Mogadiscio, ya sea mediante acciones militares o negociaciones. La caída de Mogadiscio en manos del grupo armado podría reabrir un nuevo ciclo de violencia regional por parte de sus vecinos, principalmente Etiopía y Kenia, de la mano de EEUU, que tendría desastrosas consecuencias, y que evidenciaría el fracaso de la comunidad internacional en la política desarrollada con relación a Somalia en los últimos 30 años, tal y como ha sucedido en otros contextos, como Afganistán.



Población refugiada sudanesa llegando a Sudán del Sur, 2025. Fuente: Ragione Moses Runyanga / ACNUR

SUDÁN

Una guerra cada vez más difícil de contener

Tras más de 1.000 días de conflicto, la guerra civil en Sudán, que estalló en abril de 2023 debido a la lucha de poder dentro de la junta militar tras la caída de Omar al-Bashir, alcanzó en 2025 una nueva etapa de partición de facto del país. La guerra, que enfrenta a las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) lideradas por el general Abdel Fattah al-Burhan, junto con una serie de milicias islamistas y grupos rebeldes, contra las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) comandadas por Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo, aliadas con otros grupos insurgentes y respaldadas por mercenarios extranjeros, ha provocado la crisis humanitaria y de desplazamiento más grave del mundo. Las conversaciones de paz que se han desarrollado a lo largo de los tres años de guerra no han tenido un verdadero carácter sustantivo, y solo han producido una declaración compartida de compromiso para proteger a los civiles y diferentes altos el fuego que han sido repetidamente violados por las partes, siendo incapaces estas iniciativas de sofocar la violencia.

El panorama militar en 2025: la consolidación de la partición del país

El año 2025 marcó un punto de inflexión en la dinámica de control territorial en el país, pasando de un “mosaico” de control a la formación de dos bloques geográficos claramente definidos controlados por cada parte. En

marzo de 2025, las SAF lograron una victoria estratégica significativa al recuperar el control de Jartum, que estaba en manos de las RSF desde el inicio del estallido de la guerra. A partir de ese momento el Ejército ha logrado asegurar el control sobre las regiones centro y este del país, operando desde su cuartel general en Port Sudán. Sin embargo, la ofensiva por el control de la capital obligó a las fuerzas paramilitares de las RSF a replegarse hacia el oeste del Nilo, poniendo el foco en la región de Darfur. Tras un importante asedio, en octubre las RSF capturaron El Fasher, capital de Darfur y último bastión del Ejército en la región, alterando nuevamente el equilibrio de fuerzas. Esta victoria permitió a las RSF consolidar su control casi total sobre la región de Darfur, acceder a ricos yacimientos de oro, asegurar rutas de suministro críticas hacia Libia y Chad y liberar tropas para concentrar sus esfuerzos en la región de Kordofán, que se ha convertido en el principal frente de batalla actual.

La toma de El Fasher ha profundizado la división de facto de Sudán, que opera actualmente bajo dos administraciones diferentes. Por un lado, el Ejército, que ejerce el Gobierno internacionalmente reconocido con sede en Port Sudán, controla el centro y el este del país apoyado en una coalición de militares, milicias islamistas y antiguos rebeldes. Por otro lado, las RSF controlan Darfur y gran parte del oeste y sur del país, y decretaron

una administración paralela liderada por Hemedti cuyo Gobierno opera en Nyala, Darfur del Sur, aunque no cuentan con reconocimiento internacional.

Ambos gobiernos se sostienen sobre una importante fragilidad interna. Las SAF dependen de facciones islamistas radicales, lo que genera tensiones diplomáticas porque varios aliados no quieren la vuelta de miembros del antiguo régimen de al-Bashir. Por su parte, los aliados de las RSF carecen de un posicionamiento común y se han negado a fusionar sus tropas con el mando central de Hemedti.

Catástrofe humanitaria y proxy war

Según la ONU, 12,8 millones de personas se encuentran desplazadas por la violencia, de las cuales más de 4,3 millones han huido a través de las fronteras, principalmente a Egipto, Chad y Sudán del Sur. Por otro lado, se estima que más de 21 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria aguda, existiendo focos de hambruna por todo el país, ya que ambos bandos bloquean activamente la ayuda humanitaria. Asimismo, la guerra habría provocado la muerte de unas 400.000 personas. La toma de El Fasher fue particularmente sangrienta, con más de 1.300 civiles asesinados en la primera semana y las RSF siendo acusadas de limpiezas étnicas, masacres grabadas en vídeo y violencia sexual generalizada contra mujeres y niñas.

Los actores regionales han amplificado la letalidad, devastación y persistencia de la violencia mediante la provisión de material, financiación y apoyo político. Un factor determinante en la escalada bélica ha sido la erosión de la superioridad aérea tradicional de la SAF debido a que las RSF han adquirido drones de largo alcance, lo que les ha permitido atacar otro tipo de objetivos, como la base del Ejército en Port Sudán.

Sudán se ha convertido en el escenario de una guerra por delegación (*proxy war*) alimentada por intereses extranjeros. Los Emiratos Árabes Unidos, que proporcionan armas y

drones a través de redes en Libia y Chad, es considerado el principal aliado de las RSF, aunque también se ha detectado la presencia de mercenarios rusos (Wagner) y colombianos. Las RSF también reciben apoyo proveniente de República Centroafricana, Chad, Libia, Kenia, Sudán del Sur y Uganda. Del lado del Ejército, los principales aliados son Arabia Saudita, Türkiye, Egipto, Rusia, Qatar, Pakistán e Irán. Particularmente significativos son los roles que juegan los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, ya que por un lado apoyan a una de las partes beligerantes, y por otro participan activamente en los esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra civil sudanesa.

La guerra en Sudán ha provocado la crisis humanitaria y de desplazamiento forzado más grave del mundo

Perspectivas de futuro: ¿Hacia una guerra prolongada?

Si bien desde el origen de la guerra entre las SAF y las RSF se han llevado a cabo negociaciones de paz entre las partes, estas no han contado con un verdadero compromiso de las partes y hoy las probabilidades de lograr un acuerdo de paz se consideran bajas.

El principal esfuerzo de mediación se desarrolla bajo el denominado grupo “Quad” (EEUU, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto), pero también existen otros espacios que involucran al bloque de África Oriental IGAD. En ambos casos los esfuerzos se han centrado en lograr un alto el fuego y una tregua humanitaria, sin éxito. También el enviado especial de Donald Trump, Massad Boulos (consuegro del presidente de EEUU), ha intentado negociar un alto al fuego, pero los esfuerzos están estancados debido a la resistencia de los sectores islamistas de las SAF y la continuación de los combates en Kordofán. Un hecho que podría modificar el curso de los acontecimientos es la posibilidad de que EEUU catalogue a las RSF como una organización terrorista tras las atrocidades denunciadas en El Fasher. Si esto sucede, se dificultaría la financiación y compra de armas de las RSF (especialmente a través del oro), lo que podría dar un giro a la simetría de la guerra, obligando a la parte más débil a negociar, pero también podría aislar a las RSF y hacer que un acuerdo negociado sea aún más difícil de alcanzar.



El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Gang Supression Force. Fuente: Naciones Unidas

HAITÍ

El reto de la inseguridad ante las elecciones y el despliegue de una nueva misión internacional en 2026

En los últimos años, Haití ha sufrido una crisis multidimensional –política, humanitaria y de seguridad– que ha llevado al país al borde del colapso. Aún si todos los indicadores de violencia e impacto humanitario parecían haber alcanzado su céñit en 2024, en 2025 siguió incrementándose el impacto de la violencia entre la población civil. Según datos de Naciones Unidas a finales de 2025, más de 16.000 personas habían sido asesinadas y más de 7.000 habían resultado heridas por la violencia vinculada a las bandas criminales desde el inicio de 2022 –fecha en la que se empezó a contabilizar tal tipo de violencia. Según datos de Naciones Unidas, el número de personas asesinadas en 2025 probablemente superará la cifra de 2024 (5.601, la más alta de la historia del país, con un incremento importante respecto de los años anteriores). Entre enero y finales de agosto de 2025, más de 4.000 personas habían sido asesinadas en el marco de la violencia relacionada con los grupos criminales.

Las bandas armadas –alrededor de 300, muchas de ellas integradas en la coalición de grupos armados Viv Ansamn– controlan el 90% de la capital, más del 50% del departamento de Artibonite –el mayor del país– y un

porcentaje significativo de los departamentos Centro y Oeste y de otras regiones del país. Según estimaciones del centro de investigación International Crisis Group, solamente Viv Ansamn podría contar con entre 12.000 y 20.000 miembros.

Según datos de Naciones Unidas de finales de 2025, más de 16.000 personas habían sido asesinadas y más de 7.000 habían resultado heridas por la violencia vinculada a las bandas criminales desde el inicio de 2022

En cuanto al impacto humanitario de la violencia, se estima que a finales de 2025 alrededor de 1,4 millones de personas (el 12% de la población total) se hallaban en situación de desplazamiento forzoso (el doble que en septiembre de 2024) y que para mediados de 2026 más de la mitad de la población (casi seis millones de personas) enfrentarán una grave inseguridad alimentaria, con casi dos millones en niveles de emergencia alimentaria aguda. En el plano educativo, se estima que 1.600 escuelas se mantienen cerradas, que otras muchas están ocupadas por bandas armadas y que varios centenares han sido destruidas (284 solamente en 2024), provocando la disrupción del ciclo educativo a cientos de miles de menores en todo el país. En la misma línea, se estima que el 70% de centros de salud y hospitales en Puerto Príncipe están cerrados o inoperativos, provocando serias restricciones en el sistema sanitario de la región metropolitana. UNICEF considera que aproximadamente

la mitad de los miembros de las bandas armadas son menores. Si bien en 2024 el reclutamiento de menores ya se incrementó significativamente (un 70% respecto del año anterior), en 2025 la participación de menores en las actividades de tales grupos armados aumentó drásticamente (un 700%, según datos de mediados de año).

La expansión territorial de las bandas armadas

De cara a 2026, la situación de inseguridad, conflictividad y crisis humanitaria podría agudizarse dramáticamente, por varios motivos. En primer lugar, por la **expansión territorial de las bandas armadas** más allá de la región metropolitana. En departamentos como Artibonite y Centro, el número de personas asesinadas en 2025 se triplicó respecto del año anterior. Según algunos análisis, los objetivos estratégicos de las bandas armadas incluirían el control de las carreteras que unen la capital con el norte del país y con la frontera con República Dominicana. Fuentes policiales advirtieron a finales de 2025 que la pérdida de control sobre los dos departamentos más grandes del país –Artibonite y Oeste– supondría el fracaso de seguridad más grave de la historia de moderna de Haití. Cabe destacar que Artibonite está considerado históricamente como “el granero de Haití”, pues concentra un importante porcentaje de la producción agrícola del país.

En segundo lugar, cabe destacar el dramático incremento durante 2025 de la letalidad de las operaciones de seguridad estatales. Según Naciones Unidas, en 2025 tales operaciones provocaron el 61% de las víctimas mortales y personas heridas en el marco del conflicto armado –el 30% por ataques de bandas armadas y el 9% restante por acciones de grupos de autodefensa. Naciones Unidas, algunos gobiernos y varias organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por tres fenómenos vinculados a las operaciones estatales contra las bandas armadas. El primero fue la contratación por parte del Gobierno de la empresa de seguridad privada Vectus Global –creada por el fundador de Blackwater, Erick Prince– para formar parte de una unidad de combate de auxilio y apoyo a la policía y el Ejército en su lucha contra los grupos armados. Aunque el Gobierno no dio detalles sobre tal contrato, algunas voces sostienen que Vectus desplegó más de 200 efectivos en los primeros meses de operaciones –y tenía la intención de hacerlo con otros cientos de efectivos para finales de 2025 y 2026– y que jugó un importante rol en algunos de los combates más intensos del año, como los enfrentamientos en agosto alrededor del palacio presidencial en agosto de 2025. El segundo aspecto que generó dudas e incertidumbre fue el uso intensivo de drones por parte de Vectus –y de la mencionada

Las bandas armadas controlan el 90% de la capital, más del 50% del departamento de Artibonite –el mayor del país– y un porcentaje significativo de los departamentos Centro y Oeste y de otras regiones del país

unidad de combate coordinada por el primer ministro–contra bandas armadas. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solamente entre marzo y septiembre los ataques con drones en operaciones antipandillas –que tildó de ilegales según el derecho internacional– provocaron la muerte de como mínimo 559 personas, incluidos 11 menores. El tercer factor que generó importantes críticas fue el incremento de las ejecuciones extrajudiciales durante operaciones policiales. Según Türk, solamente en los primeros nueve meses del año unidades policiales especializadas ejecutaron sumariamente a 174 personas este año por presunta afiliación a pandillas y supuestamente apoyaron o participaron en ataques por parte de grupos de autodefensa –movimiento conocido como Bwa Kale–/o turbas espontáneas de civiles contra presuntos miembros de pandillas, con un saldo de más de 500 víctimas mortales. A pesar de que hay un embargo de armas en Haití desde 2022, Naciones Unidas considera que hay hasta 500.000 armas

ilegales en circulación en el país, la gran mayoría en manos de bandas armadas y, en menor medida, de grupos de autodefensa. Según algunos informes, las brigadas de autodefensa se habrían fortalecido notablemente en los últimos dos años, adquiriendo armamento de gran calibre e incrementando su coordinación entre ellos. Según ICG, en ocasiones las autodefensas son más eficaces que el Estado en la lucha contra las pandillas, ya que conocen a fondo los territorios que protegen y pueden mantener una presencia continua en sus localidades.

Ante la crisis de inseguridad del país, en octubre de 2023 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas creó la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por Kenya, y con policías de países como Bahamas, Guatemala, El Salvador o Jamaica. Aunque originalmente la misión debía contar con hasta 2.500 efectivos, la cifra real jamás superó los 970. Además, varias dificultades de tipo legal, logístico y de claridad en el mandato de la misión provocaron que el despliegue de la misma no se produjera hasta la segunda mitad de 2024, una vez los grupos armados ya habían coordinado sus acciones (los primeros ataques armados de Viv Ansamn se produjeron a principios de 2024) y habían consolidado el control territorial de partes muy extensas de la capital. Ante la incapacidad de la MSS de hacer frente o revertir la situación de violencia generalizada, y ante los recurrentes ataques de las bandas armadas a la misión, el 30 de septiembre de 2025 el Consejo de Seguridad aprobó una resolución (2793, presentada por EEUU y Panamá) que transformaba la MSS en la Fuerza de Eliminación de Bandas (**Gang Supression Forces, GSF**). Dicha fuerza tendrá una mayor fortaleza (hasta 5.500 efectivos militares), capacidad ofensiva, cobertura

territorial, financiación y autonomía operativa respecto de las autoridades haitianas, así como una mayor capacidad de abordar algunos de los principales retos del país vinculados a la criminalidad, como el narcotráfico y la circulación ilegal de armas. Además, tanto la OEA como Naciones Unidas hicieron público su compromiso de implicarse mucho más decisivamente en el desempeño de la misión, a través de la creación de una Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH) –para brindar apoyo logístico y operativo a la GSF y al Gobierno haitiano– y de un Grupo Permanente de Socios –que incluye a países como Bahamas, Canadá, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Kenya y EEUU– para movilizar tropas y fondos para la misión. Sin embargo, algunas voces estiman que el despliegue operativo de la misión **no podrá realizarse hasta aproximadamente abril de 2026**, y que la plena capacidad operativa de la GSF no se alcanzará hasta unos meses más tarde, de modo que existen temores de que las bandas armadas puedan aprovechar la transición entre la MSS y la GSF para aumentar su capacidad y sus operaciones armadas.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias en 2026

Otro factor que podría provocar un deterioro de la situación de seguridad en 2026 es la convocatoria, tras numerosos retrasos, de **elecciones presidenciales, legislativas y locales para agosto y diciembre de 2026**. Ante el vacío de poder provocado en parte por el asesinato del ex presidente Jovenel Moïse en 2021, en 2024, tras

varios años de negociaciones, se estableció un Consejo Presidencial de Transición conformado por representantes de distintos partidos y sectores de la sociedad haitiana con el objetivo de asumir las funciones presidenciales y de guiar tanto la transición política en el país como el proceso de redacción de una nueva constitución –este último proceso fue formalmente abandonado a finales de 2025, por falta de condiciones y de consenso al respecto. En tanto que el mandato del CPT finaliza el 6 de febrero de 2026, para evitar el bloqueo institucional del país, las elecciones se convocaron originalmente para noviembre de 2025, pero tuvieron que ser pospuestas nuevamente por la situación de inseguridad generalizada. Además del vacío del poder y la parálisis institucional, en los últimos años el país ha vivido una enorme fragmentación e inestabilidad política, especialmente en el Gobierno. Cabe recordar que las últimas elecciones en Haití se celebraron en 2015 y 2016 y que desde 2016 ha habido 12 primeros ministros. Ante este escenario, y tomando en consideración los altos niveles de protestas, violencia electoral y represión policial registrados en comicios anteriores –como los de 2015 y 2016–, algunos análisis han advertido sobre el riesgo de incremento de la inestabilidad política en el país. Además, otras voces han advertido sobre el riesgo de que los grupos armados utilicen tales comicios para su legalización, blanqueamiento, amnistía o inclusión en estructuras de gobierno o representación democrática. En los últimos años, varios líderes de Viv Ansanm han lanzado mensajes de calado político, han exigido al Gobierno una negociación directa, han desarrollado vínculos con determinados sectores políticos y económicos e incluso, en 2025, han establecido un partido político.



Terremoto en Afganistán en 2025. Fuente: UNICEF

AFGANISTÁN – PAKISTÁN

El riesgo de una confrontación a gran escala

La situación de tensión entre Afganistán y Pakistán corre el riesgo de agravarse en los próximos meses y convertirse en un nuevo escenario de violencia a gran escala en una región seriamente afectada por la conflictividad armada en las últimas décadas. Un [patrón de violencia, que se ha establecido en los últimos meses](#) con ataques por parte del grupo talibán pakistaní TTP contra las fuerzas de seguridad y también contra objetivos civiles, acusaciones de Pakistán al Gobierno talibán afgano de apoyo a esta insurgencia, que ante la inacción afgana desencadenan respuesta militar pakistaní sobre territorio afgano y aumento de la violencia, y que podría cronificarse y escalar en 2026. Si bien desde la caída del Gobierno afgano y el retorno al poder de los talibanes en 2021 la situación entre ambos países empeoró considerablemente, en 2024 y 2025 este deterioro se agravó notablemente, con importantes episodios de violencia en la zona fronteriza y serias acusaciones mutuas. Desde la reinstauración del régimen talibán en Afganistán, la situación de violencia armada en Pakistán ha escalado cada año, especialmente en Khyber Pakhtunkwa, provincia fronteriza con Afganistán y epicentro de la acción armada de los talibanes pakistaníes.

Una tensión multidimensional

Varias cuestiones han estado en el centro de esta tensión, fundamentalmente los desacuerdos por el retorno de

población refugiada afgana residente en Pakistán, cuyo regreso a Afganistán ha tratado de forzar el Gobierno pakistaní, y las acusaciones por parte de Pakistán de apoyo a la insurgencia talibán pakistaní por el Gobierno talibán afgano. [Naciones Unidas estimaba que, a mediados de 2025, más de 700.000 personas afganas habían retorna](#)do y se hallaban en una situación de enorme precariedad en su país de origen. Este retorno forzado no solo ha tenido enormes consecuencias humanitarias para la población que se ha visto obligada a regresar, sino que ha aumentado las suspicacias de Afganistán frente a Pakistán al haber contribuido a acrecentar la crisis humanitaria que atraviesa el país desde la marcha forzada de las organizaciones humanitarias internacionales y el impacto de catástrofes como el terremoto de agosto de 2025. En su enfrentamiento con Pakistán, Afganistán pierde el apoyo de uno de los pocos países que está dispuesto a mantener relaciones con un régimen proscrito por la comunidad internacional tras el retorno talibán y las graves violaciones de derechos humanos que tienen lugar en el país.

Por otra parte, además del cruce de acusaciones verbales entre Pakistán y Afganistán y diferentes incidentes diplomáticos, también se han registrado episodios de violencia, como los ataques aéreos por parte de las fuerzas de seguridad de Pakistán que realizaron sobre territorio afgano en marzo de 2024 en respuesta a atentados

reivindicados por el TTP. Estos bombardeos tuvieron lugar contra presuntas bases del grupo en las provincias de Paktika y Khost y dieron lugar a la respuesta militar del Gobierno afgano, con bombardeos en el distrito de Kurram en Pakistán. En diciembre de 2024 la tensión atravesó una nueva espiral, marcada por varios ataques pakistaníes en territorio afgano contra miembros del TTP, que, según diversas fuentes –incluida Naciones Unidas–, provocaron decenas de víctimas civiles. Tras varias acciones del TTP en Pakistán que causaron la muerte de 16 soldados, las fuerzas de seguridad pakistaníes lanzaron bombardeos sobre la provincia afgana de Paktia, dirigidos a presuntas bases del grupo. Como resultado, murieron al menos 46 civiles, aunque el Gobierno pakistaní aseguró haber abatido a varios líderes insurgentes. En represalia, Afganistán llevó a cabo una respuesta militar que terminó con la muerte de un soldado pakistaní. Paralelamente, el Gobierno talibán afirmó haber atacado bases del ISIS-KP en suelo pakistaní, lo que desencadenó nuevas acciones de las fuerzas de seguridad de Pakistán, causando la muerte de varios combatientes talibanes afganos. En octubre de 2025 se vivió una nueva escalada de la violencia con ataques aéreos pakistaníes en la provincia de Paktika y que también alcanzaron Kabul y que fueron respondidos por parte de Afganistán. Decenas de soldados murieron en estos enfrentamientos, que se repitieron en días posteriores. La UNAMA señaló que al menos 37 civiles habían muerto y 425 resultaron heridos, a lo que habría que añadir las muertes militares. Este episodio de violencia llevó al cierre de la frontera entre ambos países, que ha permanecido bloqueada desde entonces. **La interrupción del paso fronterizo implicó un descenso de la violencia**, al dificultar el tránsito de los insurgentes de un lado al otro, pero al mismo tiempo ha tenido un grave impacto en el comercio entre ambos países, así como en la movilidad de las personas.

Las negociaciones para el alto el fuego

Tras estos enfrentamientos, delegaciones de los Gobiernos afgano y pakistaní se reunieron en Doha, y declararon un alto el fuego inmediato. Posteriormente volvieron a reunirse en Türkiye, pero la falta de avances para un acuerdo definitivo llevó al reinicio de la violencia en noviembre, con nuevos ataques aéreos y más muertes civiles. En diciembre se produjo un nuevo encuentro en Arabia Saudita en el que se pactó seguir manteniendo el acuerdo de alto el fuego, pero la fragilidad del acuerdo y la falta de diálogo sustantivo hacía prever un posible reinicio de la violencia en 2026 y la consolidación de un ciclo de enfrentamientos reiterados entre los países vecinos, poniendo en grave riesgo la seguridad regional y agravando la crisis humanitaria que padecen amplios sectores

de la población local, especialmente las comunidades refugiadas afganas. Las acusaciones pakistaníes de que el régimen talibán sostiene a la insurgencia pakistaní talibán del TTP y con quien el Gobierno pakistaní se enfrenta en un conflicto armado que ha escalado de forma importante desde el retorno de los talibanes afganos al poder en el país llevan a una espiral de acusaciones y respuestas militares por ambos actores que pueden cronificarse si no se avanza en negociaciones sustantivas y sinceras.

De hecho, en octubre **el ministro de defensa pakistaní, Khawaja Muhammad Asif, advirtió** que si bien por el momento el acuerdo de alto se mantenía vigente, en el caso de que las negociaciones fracasaran existía el riesgo de una guerra abierta entre ambos países. En diciembre se produjeron nuevos episodios de violencia, incrementando la fragilidad del contexto. A esta situación se unen las acusaciones por parte de Pakistán de que Afganistán presta apoyo al grupo armado baluchi BLA y también a ISIS-KP, el capítulo regional de ISIS –si bien ISIS y los talibanes afganos se han enfrentado repetidamente, especialmente antes del retorno de los talibanes al poder en Afganistán.

Los enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán corren el riesgo de escalar y convertirse en un conflicto armado abierto

Riesgo de escalada en 2026

El frágil equilibrio entre los países vecinos y entre los que siempre ha existido una relación de cooperación y hostilidad de manera prácticamente simultánea se halla en entredicho, lo que podría convertirse en una nueva crisis regional de violencia en una zona en la que confluyen múltiples conflictos y tensiones internos e internacionales (conflictos internos en Afganistán, Pakistán e India; India-Pakistán; India-China; Irán, entre otros). El papel de los actores facilitadores del diálogo es fundamental para encaminar la crisis hacia un acuerdo sostenible y permanente. Hasta el momento Türkiye y Qatar han desempeñado un papel crucial. En un contexto de aislamiento internacional sobre el régimen talibán son pocos los países que pueden jugar este papel, tanto acogiendo las negociaciones como facilitando el diálogo entre los Gobiernos. Por otra parte, existe el riesgo de que este acuerdo contribuya a una normalización del régimen talibán en Afganistán contra la que han advertido múltiples organizaciones de derechos humanos, y de manera significativa organizaciones de mujeres, por la situación de apartheid de género a la que se les somete desde 2021. Así pues, el necesario diálogo para reconducir los enfrentamientos y violencia entre los países vecinos debe ir acompañado de mayores medidas de presión por parte de la comunidad internacional para lograr un cambio en la situación de las afganas y el pleno respecto a sus derechos humanos.



Bombardeos en la población de Kyauktaw. Fuente: Wikimedia commons

MYANMAR

La cronificación y regionalización del conflicto armado

El conflicto armado en Myanmar se halla en una encrucijada ante la confluencia de diferentes factores que apuntan a una posible escalada, cronificación y regionalización de la situación de violencia y crisis política. El riesgo de que el país quede estancado en un conflicto armado de alta intensidad con escasas perspectivas de cambio se ha acrecentado en los últimos meses de 2025, ante el fortalecimiento de algunas insurgencias, el surgimiento de grupos armados nuevos y la recuperación parcial de la capacidad de respuesta militar por parte de las fuerzas de seguridad de la junta militar. La posibilidad de que las elecciones, si bien fraudulentas, permitan una cierta normalización del régimen en el ámbito internacional, podría contribuir a cronificar en 2026 la crisis política y de violencia que atraviesa el país desde 2021.

Ante la creciente capacidad militar por parte de varias insurgencias, demostrada en 2024 y 2025 con la toma de control de amplias zonas de territorio por diferentes grupos armados, especialmente el grupo rakhain Arakan Army (AA), las Fuerzas Armadas birmanas intensificaron su contraofensiva, recuperando el control de algunas zonas que habían pasado a estar bajo administración de diferentes grupos armados insurgentes. Las fuerzas de seguridad intensificaron los ataques aéreos y el uso de drones para combatir a la oposición armada, especialmente a partir del terremoto que asoló el país en marzo. En paralelo a un refuerzo de la ofensiva militar,

también se impulsaron acuerdos de alto el fuego con diferentes grupos armados (TNLA, MNDAA) –que como en anteriores ocasiones estuvieron impulsados por China– y una estrategia, que se prevé que continúe en el futuro inmediato, de promover la división entre los diferentes actores que conforman la oposición militar y política a la junta militar birmana.

La escalada de la violencia en el estado Rakhine

La situación de violencia es especialmente preocupante en el estado Rakhine, que cabe prever que será uno de los escenarios cruciales del conflicto armado en los próximos meses, ya que la insurgencia ha logrado poner en jaque a las fuerzas gubernamentales en este territorio. Si bien las Fuerzas Armadas habrían logrado contener, al menos parcialmente, el impacto de la operación insurgente 1027, origen del debilitamiento militar del régimen en los dos últimos años, no se ha logrado limitar de la misma manera los avances del AA. La intensificación de la acción armada de la insurgencia rakhain, que motivó una respuesta militar gubernamental contundente, había llevado a que el grupo armado AA controlara la práctica totalidad del territorio del estado Rakhine, con graves consecuencias humanitarias para la población rohingya que todavía habita en el estado, tras el éxodo masivo que tuvo lugar en 2017 como consecuencia de la campaña militar de las

FFAA birmanas cuyas acciones llegaron a ser calificadas de genocidio. Las propias FFAA habían iniciado campañas de reclutamiento forzado entre la población rohingya con el objetivo de incrementar su capacidad operativa en el territorio Rakhine, ante la amenaza que el avance del AA ha representado para el régimen militar en 2024 y 2025.

En respuesta al agravamiento de la situación de la población rohingya diferentes análisis apuntaron a un fortalecimiento de los grupos insurgentes rohingyas, que tras el éxodo a Bangladesh de 2017 quedaron muy debilitados. Estos grupos habrían cobrado fuerza y tendrían como principal objetivo combatir el avance del AA, aliándose incluso, de forma paradójica, con las fuerzas de seguridad birmanas. Esta situación podría llevar a una escalada de la violencia en el estado Rakhine lo que a su vez podría conducir a un deterioro de la situación humanitaria y a un nuevo desplazamiento de población rohingya hacia Bangladesh, si bien en los últimos meses más de 150.000 personas ya se han refugiado en el país vecino. La **situación de la población refugiada en este país**, donde residen más de 1,2 millones de personas que huyeron de Myanmar, sobre todo en 2017, es de enorme precariedad y graves dificultades para ver cubiertas necesidades básicas de salud o alimentación, entre otras, que se unen a los graves impactos de la crisis climática sobre Bangladesh, uno de los países del mundo más vulnerables frente a sus consecuencias. Bangladesh se halla en un contexto de transición política, pendiente de la celebración de elecciones en febrero que señalarán la orientación política del país en el futuro inmediato, lo que a su vez impactará en la situación de la población rohingya. El grupo armado AA ha acusado a Bangladesh de dar apoyo a la insurgencia rohingya y **algunos análisis apuntan a la importancia de favorecer un diálogo tripartito** entre la insurgencia rakhain, las organizaciones rohingyas y el gobierno bangladesí para prevenir un agravamiento de la violencia y la crisis humanitaria en la zona fronteriza.

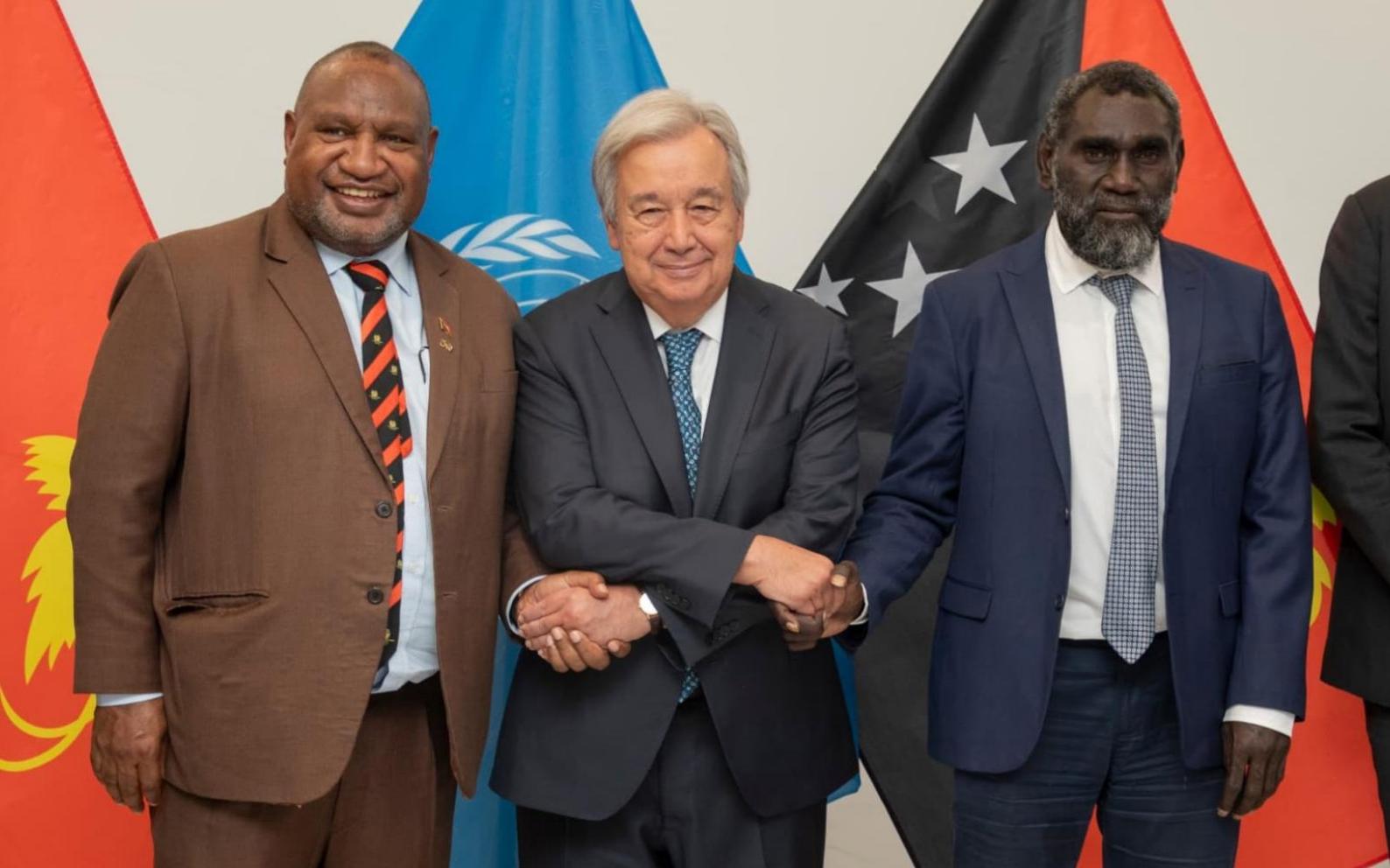
Elecciones fraudulentas

Por otra parte, la celebración de las primeras elecciones tras el golpe de Estado de 2021 –comicios cuya primera fase ha tenido lugar en diciembre de 2025 y la segunda en enero de 2026– añade complejidad política al contexto en el que otros países de la región, como China y Bangladesh ven complicarse el equilibrio de fuerzas entre Gobierno e insurgencias, con potenciales impactos regionales o locales. En los últimos meses China habría reforzado su apoyo al Gobierno birmano, ante el grave riesgo que el avance de los grupos insurgentes lograra

forzar una caída del régimen militar, cronificando así el contexto de conflicto armado a través de un mayor apoyo militar mediante transferencias de armamento y tecnología que permitieron a las fuerzas de seguridad de Myanmar contener parcialmente el avance de la oposición armada. Si bien las elecciones han sido consideradas como carentes de toda credibilidad por gran parte de los actores de la comunidad internacional, China podría apoyar el resultado si como resultado de los comicios se conforma un Gobierno civil que permita un cierto distanciamiento del golpe de Estado del 2021 y que progresivamente pueda ser considerado un interlocutor más aceptable para los actores regionales e internacionales, aunque no conlleve un retorno a un proceso de democratización del país. **La victoria del partido próximo al régimen militar USDP**, que en los comicios de diciembre obtuvo prácticamente el 90% de los votos, a pesar de una participación mucho más baja de lo previsto en un entorno fuertemente coercitivo, muestra el carácter fraudulento de las elecciones y al mismo tiempo la fragilidad del régimen. Si embargo, el Gobierno resultante permitiría una cronificación de un régimen autoritario en Myanmar favorable a los intereses chinos.

Perspectivas para el 2026

No se vislumbra en el futuro inmediato una salida a la situación de violencia, represión y autoritarismo que ha caracterizado al país desde el golpe de 2021 y que puso fin al proceso de transición a la democracia iniciado años antes. La falta de capacidad de liderazgo de los actores políticos de la oposición al régimen, la capacidad de las fuerzas de seguridad para haber revertido parcialmente los enormes avances de la insurgencia y la cierta normalización internacional que pueden otorgar los resultados electorales impiden vislumbrar una salida a la situación política que atraviesa el país. Por otra parte, el riesgo de escalada de la violencia en zonas importantes del país, como la región fronteriza con Bangladesh, país que también atraviesa un contexto de transición política, pueden llevar a una escalada o, como mínimo una cronificación de un conflicto armado de alta intensidad con graves impactos humanitarios sobre la población local, incluyendo serias violaciones a los derechos humanos de las minorías. Si la comunidad internacional, y especialmente los países del entorno y los actores regionales como ASEAN, no impulsan una acción decidida diplomática de impulso de negociaciones y acciones de presión contra el Gobierno de Myanmar, difícilmente se lograrán cambios en el escenario del país a corto o medio plazo.



El secretario general de Naciones Unidas con el primer ministro de Papúa Nueva Guinea y el presidente de Bougainville. Fuente: Naciones Unidas

PAPÚA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE)

Los avances en el proceso de paz y en la negociación sobre el estatus político de la isla de Bougainville

Durante 2025 se produjeron una serie de avances que podrían acelerar e incluso culminar el proceso de negociación entre los Gobiernos de Papúa Nueva Guinea y el Gobierno Autónomo de Bougainville para determinar el estatus político de la isla de Bougainville. Cabe recordar que Bougainville vivió un conflicto armado (1988-98) entre las Fuerzas Armadas de Papúa Nueva Guinea y el grupo armado de oposición Ejército Revolucionario de Bougainville (BRA, por sus siglas en inglés) en el que se estima que murió aproximadamente un 10% de la población de la isla y que algunas voces han descrito como el conflicto más letal en Oceanía desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En 2001 se firmó un acuerdo de paz que contemplaba, entre otras cuestiones, la celebración de un referéndum de autodeterminación una vez se hubiera logrado el desarme del BRA y el establecimiento de un gobierno autónomo en Bougainville. Tras la culminación exitosa de la pacificación de Bougainville y el establecimiento de un gobierno autónomo en la isla, en 2019 se celebró un referéndum en el que un 97,7% de la población votó a favor de la independencia. Sin embargo, el propio acuerdo de paz estipulaba que el referéndum no era vinculante y que es el Parlamento de Papúa Nueva Guinea quien tiene la competencia para tomar una decisión definitiva sobre el estatus político de Bougainville, por lo que se

requería un proceso de diálogo al respecto entre ambos gobiernos. Desde 2020 la negociación entre ambos gobiernos se ha visto obstaculizada por la irrupción en su momento de la pandemia de la COVID-19 y también por desacuerdos políticos de fondo y de orden metodológico y procedimental sobre la propia negociación y validación de los resultados del referéndum. La ralentización y en muchos momentos parálisis del diálogo provocó no solamente críticas y acusaciones cruzadas entre las partes, sino también el surgimiento de voces que alertaban sobre un posible incremento de la tensión y la conflictividad en Bougainville.

A pesar de tales dificultades y tensiones, la negociación en Bougainville es actualmente uno de los escasos ejemplos a escala internacional en los que un conflicto político – que tuvo su fase armada – se aborda desde la negociación, con mediación independiente – Jerry Mateparae, antiguo Gobernador-General de Nueva Zelanda –, la facilitación de Naciones Unidas y el apoyo de organizaciones regionales, como el Melanesian Spearhead Group (MSG) y el Foro de Islas del Pacífico (PIF). Además, en 2025 se lograron una serie de avances que permiten albergar una cierta esperanza respecto del proceso de diálogo acerca del estatus político de la isla de Bougainville.

El Acuerdo Melanesio entre Papúa Nueva Guinea y Bougainville

El primero de estos factores es el pacto –denominado **Acuerdo Melanesio**– que ambas partes firmaron en junio de 2025, y que proporciona una ruta compartida para la culminación del proceso de paz iniciado en los años noventa. Tal acuerdo –que contó con la presencia de Naciones Unidas, países observadores y el mediador del diálogo, Jerry Mateparae– se ratificó tras varios días de negociaciones a puerta cerrada en Burnham (Nueva Zelanda), localidad en la que ya se llevaron a cabo algunas de las negociaciones más significativas que condujeron a la firma Acuerdo de Paz de Bougainville de 2001, y que fue calificada por ambas partes como la cuna espiritual del proceso de paz. Según el acuerdo, ambas partes reconocen la legitimidad de los resultados del referéndum de 2019 y a la vez se comprometen a aceptar la decisión sobre el estatus político de Bougainville por parte del Parlamento Nacional de Papúa Nueva Guinea –tal y como especifican el Acuerdo de Paz de 2001 y la Constitución. Independientemente de la decisión final del Parlamento y del estatus político final de Bougainville, el Acuerdo Melanesio compromete a ambas partes a explorar la creación conjunta de un marco de relación o partenariado melanesio, basado en una relación estrecha, pacífica y duradera. El acuerdo señala que los parlamentos de Papúa Nueva Guinea y Bougainville deberán decidir conjuntamente sobre la metodología de deliberación y votación en el seno del Parlamento –siendo uno de los principales elementos de disputa si la decisión debe ser aprobada por mayoría simple o bien una mayoría cualificada de dos tercios.

Para la toma de dicha decisión, el Parlamento recibirá un informe sobre los acuerdos y conclusiones del proceso de negociación entre las partes (iniciado en 2020), así como otro informe sobre el proceso de diálogo y consultas con representantes políticos y sociales de las distintas regiones que componen el país por parte del Comité Parlamentario Bipartidista sobre Bougainville. Finalmente, los Gobiernos de Papúa Nueva Guinea y Bougainville también se comprometen al fortalecimiento institucional del Gobierno de Bougainville –algunas fuentes lo interpretaron como la progresiva concesión de poderes soberanos en distintas esferas de gobernanza política y económica. En diciembre de 2025, tras una reunión del Organismo Conjunto de Supervisión –el principal espacio de negociación entre las partes– para iniciar la implementación del Acuerdo Melanesio, el primer ministro Marape declaró que el proceso de negociación estaba en su fase final y adelantó que la sesión en la que el Parlamento debería tomar una decisión sobre el estatus político de Bougainville se llevaría a cabo antes de finalizar el primer semestre de 2026. Además, también en diciembre, el Comité Nacional Bicameral sobre Bougainville, con la asistencia del mediador Jerry Mateparae, concluyó el proceso de consultas a nivel nacional sobre los contenidos del proceso

de negociación en Bougainville, uno de los requisitos fundamentales para que dicho proceso siga adelante.

El segundo aspecto importante respecto de las perspectivas futuras del proceso de paz fue la **amplia victoria del presidente de Bougainville**, Ishmael Toroama, en las elecciones celebradas en Bougainville en septiembre de 2025. Según varios medios, tal victoria legitima los objetivos y la estrategia del Gobierno de Bougainville en la negociación. Toroama, antiguo combatiente del BRA, ha sostenido desde la celebración del referéndum que la independencia significa la separación de Papúa Nueva Guinea y su establecimiento como nuevo estado reconocido por Naciones Unidas, descartando otras posibilidades como un incremento de las cotas de autogobierno o el establecimiento de un modelo de estado libre asociado.

La firma en junio de 2026 del denominado Acuerdo Melanesio proporciona una ruta compartida para la culminación del proceso de paz iniciado en los años noventa

Toroama ha declarado en varias ocasiones su intención de declarar la independencia de Bougainville el **1 de septiembre de 2027**, pues considera que es coherente con la llamada “Hoja de Ruta de Wabag”, que establece que el plazo para la declaración de independencia será “no antes de 2025 ni después de 2027”. Toroama también señaló que, en su opinión, el proceso de negociación de la independencia concluyó con el referéndum y que el diálogo debería centrarse en un acuerdo sobre la implementación del resultado del referéndum de independencia y sobre los términos de la nueva relación entre Bougainville y Papúa Nueva Guinea como dos estados soberanos independientes. De hecho, algunas voces cercanas a Toroama han advertido que Papúa Nueva Guinea no tiene autoridad para vetar el resultado del referéndum y han especulado con la posibilidad de una proclamación unilateral de la independencia de la región si el Parlamento no ratifica la secesión de la isla. Además de su posición negociadora con el Gobierno central, la victoria electoral de Toroama también parece legitimar la estrategia del Gobierno de anticipar y preparar el acceso a la plena soberanía, como el impulso de una **Estrategia de Construcción Nacional** hasta 2052 o la redacción de una nueva Constitución para Bougainville –tras varios años de un proceso consultivo y participativo, en 2025 se conformó la **Asamblea Constituyente de Bougainville**.

El apoyo internacional al proceso de negociación

El tercer factor que invita al optimismo es el apoyo internacional que está teniendo el proceso de paz. En septiembre de 2025 el secretario general de Naciones Unidas, **António Guterres, viajó a Papúa Nueva Guinea** –el primero en hacerlo– y se reunió con James Marape y Ishmael Toroama y ensalzó tanto el acuerdo de paz de 2001 como el mencionado Acuerdo Melanesio firmado en junio como un ejemplo de diálogo constructivo en cuestiones sensibles –como la secesión de una parte del territorio de un país– y como modelo de negociaciones de paz para otros países. De igual modo, Guterres puso en valor

el apoyo continuado de Naciones desde la finalización del conflicto armado en los años noventa –desarme y desmovilización de combatientes, establecimiento de un gobierno autónomo en Bougainville, organización y supervisión del referéndum de autodeterminación, facilitación de diálogo entre ambos gobiernos desde 2019 y apoyo a la labor mediadora de Mateparae– y a la vez garantizó la continuación del apoyo de la organización al proceso de diálogo. En la misma línea, otra cuestión que podría incidir positivamente en el proceso de negociación es la mayor disposición a involucrarse en el diálogo por parte de las dos principales organizaciones intergubernamentales en el Pacífico (PIF y MSG). En contraposición a las reticencias históricas a inmiscuirse en asuntos internos de sus estados miembro, en 2025 el secretario general del PIF, Baron Waqa, declaró la **disposición de la organización a abordar la resolución del conflicto** si se solicitara formalmente desde instancias oficiales en Bougainville. Por su parte, el director general del MSG, Ilan Kiloe, también declaró su disposición a brindar asistencia a Bougainville y señaló que la razón por la que se estableció inicialmente el MSG fue promover los intereses colectivos de los países melanesios, ayudar a aquellos que aún no habían alcanzado la independencia y brindarles apoyo en su objetivo de convertirse en países independientes. A diferencia de otros territorios que fueron o todavía son parte del proceso de descolonización impulsado por

La mayor disposición a involucrarse en el diálogo por parte de las dos principales organizaciones intergubernamentales en el Pacífico (PIF y MSG) podría incidir positivamente en el proceso de negociación

Naciones Unidas (como Papúa Occidental en Indonesia, Nueva Caledonia, la Polinesia Francesa, Guam o Samoa Americana), la autodeterminación de Bougainville está establecida en la constitución de Papúa Nueva Guinea. Además, en virtud del Acuerdo de Paz de Bougainville de 2001, Papúa Nueva Guinea tiene la competencia de los asuntos exteriores del país, pero permite que el Gobierno Autónomo de Bougainville interactúe externamente con organizaciones regionales.

Existe incertidumbre sobre la votación del Parlamento de Papúa Nueva Guinea acerca del estatus político de Bougainville y sobre las posibles consecuencias que tendría sobre la estabilidad y conflictividad en Bougainville una decisión que no estuviera alineada con los resultados del referéndum de 2019, pero ambas partes han expresado repetidamente –y demostrado con los hechos– su compromiso con el diálogo como mecanismo de resolución del conflicto. Los progresos logrados en 2025 permiten augurar que el proceso de negociación que se inició en los años noventa –y que llevó al acuerdo de paz de 2001, al establecimiento de un gobierno autónomo en Bougainville y la pacificación de la isla en los primeros lustros del siglo XXI, a la celebración de un referéndum de autodeterminación en 2019 y a una negociación con facilitación internacional desde 2020– podría culminar o avanzar significativamente durante el año 2026.



Edificio en Kyiv destruido en 2022. Fuente: Oleksandr Ratushniak / UNDP Ukraine

RUSIA – UCRANIA

El riesgo de una mayor brecha entre necesidades humanitarias y fondos, y los obstáculos en el proceso de paz

La invasión rusa y guerra interestatal entre Rusia y Ucrania alcanzará en febrero de 2026 su cuarto año de duración, con perspectivas para el año entrante de prolongación de las hostilidades y con ello de los graves impactos sobre la seguridad humana de la población civil. Uno de los riesgos, invisibilizado frente a otros focos de atención, es la reducción del apoyo humanitario. Por otra parte, la intensificación de la errática acción diplomática de la Administración Trump entre finales de 2025 y comienzos de 2026 ha reimpulsado la opción de una finalización negociada de la guerra, pero esa perspectiva es aún incierta, en un escenario de desacuerdos entre Rusia y Ucrania en torno a cuestiones de peso, como el territorio y las garantías de seguridad, ante la ambición del Kremlin de control total del Donbás y de tutela sobre su país vecino.

El riesgo de la reducción del apoyo humanitario

Las perspectivas en 2026 pasan por un grave acumulado de impactos multidimensionales en la población civil de Ucrania y que contrastan con la reciente reducción del apoyo internacional a los llamamientos de ayuda

humanitaria. Si bien el volumen de población en situación de necesidad humanitaria estimada para 2026 sigue reduciéndose (10,8 millones de personas frente a los 12,7 de 2025, los 14,6 de 2024 y 17,6 y 17,7 en los dos primeros años de invasión), continúa siendo una gran capa de población la que se encuentra en situación de grave vulnerabilidad. En 2025 apenas se alcanzó a recaudar **el 47% del total del llamamiento humanitario** del Plan de Respuesta y Necesidades Humanitarias de 2025 (HNRP), coordinado por Naciones Unidas, frente al umbral conseguido del 77% en 2024, el 73,09% en 2023 y el 87,9% en 2022. Algunos sectores del llamamiento quedaron especialmente infrafinanciados, como seguridad alimentaria y medios de vida (17% alcanzado); protección de la infancia (35%); agua, saneamiento e higiene (21%); abordaje de la violencia de género (46%).

La reducción de la ayuda humanitaria internacional contrasta con el incremento del 30% en apoyo militar internacional respecto al año anterior, **con 45.000 millones de dólares en 2025**, según el Ministerio de Defensa de Ucrania. Existe el riesgo de que en 2026 continúe reduciéndose el grado de respuesta a las necesidades humanitarias.

Aunque el número de población total en situación de necesidad humanitaria se ha reducido, los impactos en seguridad humana de los casi cuatro años de guerra continúan siendo de alta gravedad y concurren dinámicas que podrían intensificarse en 2026, tanto como vía de presión de Rusia hacia Ucrania en el proceso negociador como si este fracasa.

Según datos de ACNUDH, entre enero y noviembre de 2025 el total de víctimas civiles fallecidas y heridas (2.311 y 11.084, respectivamente) fue un 26% más elevado que el mismo periodo del año anterior (y un 70% más que en 2023). El incremento en el uso de misiles de largo alcance y de drones por Rusia en 2025 fue uno de los factores en ese incremento, según la ONU, y que afectó tanto a las zonas de la línea del frente como a otras áreas del país. Además, Rusia continuó lanzando ataques contra infraestructura energética, sanitaria y educativa, entre otros equipamientos civiles. Los ataques contra la red energética afectaron al suministro eléctrico, calefacción y agua. Las condiciones de vida en áreas en torno a la línea del frente continuaron deteriorándose, y Rusia continuó limitando de forma extrema el acceso humanitario a población en áreas de Ucrania bajo ocupación rusa.

Se trata de dinámicas e impactos que podrían continuar en 2026, como alertan los análisis humanitarios. Asimismo, analistas del ISW vaticinan que este año Rusia probablemente priorizará tomar el llamado Cinturón Fortaleza del Donbás –las áreas fortificadas que Ucrania ha construido en la región de Donetsk, estratégicas para contener el avance de las fuerzas militares rusas. Otros análisis señalan que aun si la guerra continua a lo largo de 2026, esta podría ir declinando en intensidad y ritmo, por las dificultades de las partes para mantener la guerra en su magnitud actual. Tanto los escenarios de intensificación de la guerra por Rusia como forma de presión paralela a las negociaciones, como los escenarios de prolongación con desescalada, implican afecciones prolongadas para la población civil, sumadas a las elevadas víctimas mortales y heridas militares en ambos bandos.

Incertidumbre en el proceso de negociaciones

En relación al proceso de negociador, las perspectivas para 2026 son inciertas. 2025 fue un año convulso, marcado por la aproximación coactiva y errática de la Administración Trump hacia Ucrania y también por su sacudida a las relaciones euroatlánticas –agravada a inicios de 2026 con el reimpulso a las amenazas sobre Groenlandia que han seguido a la deposición y captura ilegal por la fuerza del presidente venezolano por EEUU. Trump se marcó como prioridad la finalización de la guerra Rusia-Ucrania, y en 2025 la vía negociadora y diplomática ganó peso con

En 2026 podrían continuar las dinámicas de deterioro de las condiciones de vida en áreas en torno a la línea del frente e intensificarse los ataques contra infraestructura civil

respecto al año anterior. El enfoque diplomático agresivo, transaccional y tambaleante de Trump ha llevado a Kyiv y Moscú a cierta acomodación a la retórica y práctica del mandatario estadounidense y a evitar ser vistos como la parte que haga fracasar los intentos de negociación promovidos por EEUU, pero durante el primer año de la nueva Administración Trump no se lograron treguas efectivas ni acuerdo en las cuestiones de la negociación más espinosas.

Una rápida recapitulación de 2025 permite atisbar dificultades para el nuevo año. Las amenazas y humillación de Trump y su equipo a Zelenski en la reunión de febrero de 2025 en el Despacho Oval resituaron el conflicto y las opciones de negociación en la

lógica de política poder promovida por Trump, forzando a Ucrania a adaptarse a ese nuevo marco. Los altos el fuego de marzo de ese año en el ámbito energético y el Mar Negro afrontaron interpretaciones diferentes, falta de concreción y de implementación y fueron superados por las hostilidades. En abril, EEUU y Ucrania firmaron un acuerdo sobre minerales críticos y energía, en términos parcialmente renegociados por Ucrania aunque sin llegar a incluir garantías militares de seguridad para el país, y que ponía de manifiesto uno de los principales elementos en la posición del gobierno estadounidense hacia Ucrania y el conflicto: su visión transaccional y extractivista. Reuniones en mayo y junio en Turkiye de delegaciones de Rusia y Ucrania solo desembocaron en acuerdos humanitarios limitados. En los últimos meses de 2025 se intensificó la acción diplomática principalmente bajo el paraguas de EEUU, con circulación de posicionamientos y propuestas de planes de paz, y reuniones y contactos entre representantes de EEUU y de Ucrania, por un lado, y de EEUU y Rusia, por otro. De un plan de paz de EEUU de 28 puntos criticado por Ucrania y sus aliados europeos por considerarlo pro-ruso se pasó a negociar varios documentos separados complementarios, que incluían un plan de 20 puntos –revelados por Zelenski– y documentos de garantías de seguridad y de recuperación económica. A finales de año había un grado de acuerdo entre Ucrania y EEUU de en torno a un 90% del plan, acuerdo total entre ambos países en relación a las garantías de seguridad de EEUU para Ucrania, y se había avanzado hasta casi acordar la estrategia conjunta de garantías de EEUU y Europa.

El proceso de paz afronta en 2026 dificultades de peso en torno a desacuerdos en cuestiones como territorio y garantías de seguridad

No obstante, 2026 comienza sin acuerdo entre las partes en conflicto en torno a cuestiones espinosas como el territorio. Rusia se mantiene inflexible en su aspiración de control de las provincias que se anexionó (aun sin controlarlas en su totalidad), especialmente el Donbás, y exige la retirada de Ucrania de las áreas que Kyiv aún controla. Ucrania defiende congelar las líneas actuales del frente, aunque está abierta a una zona desmilitarizada propuesta por EEUU –“zona económica libre”– si Rusia se retira también. En diferentes momentos, el Gobierno

ruso ha advertido que conseguiría sus objetivos por la vía negociadora o por la fuerza. En ausencia de mayor presión externa o interna hacia Rusia, no parece probable que en 2026 en el proceso negociador el presidente ruso vaya a ceder en su ambición de control total del Donbás. Otros desacuerdos incluyen la cuestión del control y gestión de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa.

Está por ver también qué recorrido tendrán las discusiones entre Ucrania y sus socios europeos sobre la concreción de las garantías de seguridad. La [Declaración de París](#) del 6 de enero de 2026 contempla una fuerza multinacional que apoye en disuasión con medidas en aire, tierra y mar y compromisos vinculantes de apoyo a Ucrania en caso de una nueva agresión y que podrían incluir capacidades militares. Además, Francia y Reino Unido emitieron una [declaración de intenciones](#) para un despliegue de tropas de ambos países en apoyo a las capacidades de “disuasión” de Ucrania. Análisis han señalado que todavía hay gran [vaguedad en los términos](#) y recorrido pendiente, como los requisitos de aprobación parlamentaria en diversos países. Además, Rusia mantiene su posición de rechazo a tropas occidentales en Ucrania y ha advertido que serían objetivo de combate legítimo, en un contexto de tensión creciente Rusia-UE/OTAN. En conjunto, destaca en negativo la falta de marcos de discusión sobre garantías internacionales de seguridad que trasciendan el eje occidental.

Por otra parte, el contexto internacional no ayuda. La captura y deposición ilegal del presidente de Venezuela por la fuerza por EEUU añade un nuevo precedente de

uso de la fuerza contrario al derecho internacional que beneficia a la posición belicista y maximalista de Rusia respecto a Ucrania, a su visión de esferas de influencia, y a su narrativa desinformadora sobre la falta de legalidad del mandato presidencial de Zelenski. Este, pese al amparo legal de su mandato, se ha abierto recientemente en el marco del proceso negociador a la posibilidad de elecciones condicionadas a garantías de seguridad para su celebración que, por ahora, parecen improbables.

Por otra parte, no se han perfilado por ahora otros países que pudiesen tomar el relevo de EEUU en su rol de principal mediador en caso de que finalmente las negociaciones fracasen y Trump decida dejar ese papel en próximas etapas. Aunque algunos países no occidentales continúan desempeñando apoyos secundarios, el espacio de intermediación en este conflicto continúa infrapotenciado, en parte por la priorización de intereses nacionales de potencias como China o por los límites a la capacidad de una mediación que genere resultados de otros países como Turkiye.

En conjunto, pese al impulso negociador en 2025, los retos y riesgos en 2026 son mayúsculos. Por ello, se requerirán más esfuerzos multilaterales –y que trasciendan el foco occidental– que contribuyan a consolidar la vía negociada como vía necesaria de abordaje del conflicto armado, y tratar de abordar vías de desescalada militar que mitiguen el impacto en seguridad humana; en paralelo a más apoyo internacional a la respuesta humanitaria.



Reunión de la delegación del partido prokurdo DEM y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan el 30 de octubre. Fuente: Oficina de prensa presidencial

TÜRKİYE (PKK)

La oportunidad de consolidar y ampliar el proceso de paz

El año 2026 es un año de oportunidad, aunque también de incertidumbre y riesgos, para el proceso de paz en Türkiye, diálogo iniciado en 2024 y que involucra al Gobierno, al grupo armado kurdo PKK y a los partidos políticos parlamentarios del país. A finales de 2025 la iniciativa entró en una “segunda fase” tras pasos significativos durante ese año, como el fin de la lucha armada del PKK tras 41 años de insurgencia, pero el proceso también atraviesa visiones y expectativas diferentes, inconcreciones relevantes y desafíos locales y regionales. En 2026 el proceso afronta un año clave, en que podría clarificarse su dirección y alcance.

Los hitos y limitaciones de 2025, termómetro para 2026

En 2025 concurrieron elementos y pasos que encarrilaron la sorpresiva iniciativa de diálogo dada a conocer en octubre de 2024 –e iniciada de manera no pública con anterioridad– hacia un proceso que fue deviniendo más sólido, aunque con muchas dificultades e incógnitas. Entre los elementos que fueron afianzando el proceso –y que sitúan a la iniciativa de diálogo como un escenario de oportunidad en 2026– destacan diversos hitos en varios ámbitos.

El proceso de paz ha dado pasos importantes en el ámbito militar, con la finalización de la lucha armada del PKK y retirada de fuerzas de Türkiye

En relación al procedimiento, destaca el reconocimiento del líder del PKK, Abdullah Öcalan –en prisión desde 1999–, como interlocutor por parte de los actores implicados en el proceso. La iniciativa incluye niveles no públicos de negociación y también una esfera pública que involucra reuniones entre una delegación del partido prokurdo DEM y Öcalan, y reuniones entre esa delegación y los partidos políticos parlamentarios. A mediados de 2025 ese esquema se amplió a través de otro avance: el establecimiento en agosto de una comisión parlamentaria creada específicamente para el proceso de paz y que ha tenido como mandato elaborar recomendaciones de medidas políticas y legales relativas al proceso. La comisión acogió ese año audiencias en que se escuchó a más de un centenar de individuos y organizaciones. Como otro avance, ese órgano autorizó una visita en noviembre a Öcalan de una delegación multipartida (integrada por el oficialista AKP, su socio ultranacionalista MHP y el DEM; el principal partido opositor, el CHP, rechazó participar). El año se cerró con la aprobación de una extensión del mandato de la comisión hasta marzo de 2026. En negativo, el proceso no cuenta con actores facilitadores o mediadores –o al menos no públicamente–, aunque eso no ha impedido hasta ahora el desarrollo del proceso.

Tampoco con mecanismos independientes de supervisión y verificación. En ausencia de esas estructuras, actores sociales como Baris Vakfi (Fundación para la Paz) han recomendado que la sociedad civil impulse una plataforma de supervisión independiente del proceso.

Con respecto al contenido del proceso, destacan los pasos dados en el ámbito militar, con hitos como el anuncio del PKK en mayo de **finalización de la lucha armada** y disolución de la organización, en respuesta a un histórico llamamiento en febrero del líder del grupo, Abdullah Öcalan; una ceremonia de destrucción de armas a modo de desarme simbólico del PKK en el norte de Iraq en julio, un mensaje de buena voluntad hacia el proceso; la retirada del PKK de sus fuerzas presentes en Türkiye y su marcha al norte de Iraq (anuncio de octubre) y retirada también de diversas zonas en Iraq fronterizas con Türkiye hacia áreas más al interior. **Medios turcos progubernamentales** informaron de que la agencia de inteligencia turca (MIT) y las Fuerzas Armadas supervisaban el proceso de retirada y desarme del PKK. Se trata de pasos dados con implicación y apoyo de actores institucionales de Iraq y de la Región del Kurdistán iraquí. No obstante, no han trascendido públicamente los detalles sobre la retirada y desarme en marcha del PKK, y estaba pendiente la elaboración de un marco legal para la desmovilización y reintegración de los combatientes del PKK y el abordaje de la situación de sus miembros presos, esfera que abordaba la comisión parlamentaria. Análisis señalan que todavía es pronto para considerar finalizado el conflicto armado entre Türkiye y el PKK **desde un punto de vista de derecho internacional**, y 2025 no estuvo exento de ataques del Ejército turco. Aun así, el PKK presentó sus pasos como irrevocables.

En contraste, el proceso afrontó muchas limitaciones en otros ámbitos de contenido relacionados con la discriminación histórica hacia la población kurda, sin pasos concretos que avancen en reconocimiento constitucional, derechos culturales y lingüísticos, garantías de participación política, fin de la represión de actores políticos y sociales kurdos y liberación de presos políticos, entre otros. En todo caso, en el marco del trabajo de la comisión parlamentaria del proceso de paz, los actores partícipes en las audiencias emitieron propuestas; y los partidos políticos presentaron a finales de año informes con recomendaciones de medidas en algunos ámbitos. Estaba previsto que la comisión presente un informe final conjunto a principios de enero de 2026 (al cierre de esta publicación el 12/01 aún no se había hecho público) con propuestas para reformas legislativas y siguientes pasos en el proceso, pero el vicepresidente turco advirtió que el informe del DEM contenía “**demasiadas expectativas**”.

2026 como un año de oportunidad

El proceso entra en 2026 en una etapa clave. Actores kurdos y progubernamentales han señalado el tránsito

a una segunda fase. El Gobierno y el movimiento kurdo participan del proceso con expectativas y visiones y lenguajes diferentes (enfoque antiterrorista y visión de democratización, respectivamente). Este contraste de enfoques no ha impedido el despliegue hasta ahora del proceso, como muestran los hitos de 2025, aunque sí ha supuesto posiciones diferentes con respecto a ritmos, alcance y resultados, en un contexto de desequilibrio de poder, con el partido oficialista AKP en el poder y, por ello, con mayoría en la comisión parlamentaria. En todo caso, y tras un 2025 de pasos principalmente por parte del PKK –aunque coordinados y supervisados por el Estado–, en 2026 es esperable que el Gobierno y el Parlamento den algunos pasos en el ámbito político y legislativo, y que pueda haber cambios en el ámbito penal.

En 2026 podrían darse pasos legislativos que aborden la situación de los combatientes y presos del PKK, pero podrían desatenderse las demandas más amplias de democratización

El informe final de la comisión parlamentaria marcará en buena parte el alcance de los pasos que se darán. El Gobierno y su socio ultranacionalista, MHP, promotores del enfoque antiterrorista del proceso (“*Türkiye sin terrorismo*”) podrían tratar de acotar los cambios a esferas relacionadas con combatientes y presos y legislación antiterrorista y penal. Esto podría incluir algunas medidas importantes para el movimiento kurdo. Por ejemplo, el MHP se abre a modificaciones legislativas para la implementación del llamado “derecho a la esperanza”. El término hace referencia al principio jurídico que exige una revisión de las sentencias de cadena perpetua que, como la de Abdullah Öcalan, excluyen la posibilidad de libertad condicional. El Consejo de Europa dictaminó en 2014 que Türkiye debía llevar a cabo reformas legales para contemplar el “derecho a la esperanza”. El AKP se ha abierto a la finalización de medidas político-legales-administrativas que justificaba hasta ahora en el marco de la lucha contra el terrorismo, pero también a otras cuestiones como abordar la ley de partidos y ley electoral, entre otras.

Por tanto, en 2026 podría darse paso a cambios como la aprobación de un marco legal mínimamente satisfactorio para todas las partes respecto a la situación futura de los miembros del PKK; reconocimiento del derecho a la esperanza; modificaciones a la ley antiterrorista; fin de la práctica gubernamental de deposición de alcaldías electas y su sustitución por figuras designadas por el Gobierno; entre otros. No obstante, la cuestión kurda está estrechamente vinculada a derechos humanos y democratización, y es posible que los principales actores de poder releguen o frenen medidas más amplias relativas a reconocimiento de derechos.

Riesgos y obstáculos al despliegue del proceso de paz

Junto a los avances que se han producido hasta ahora en la iniciativa de diálogo, el proceso ha afrontado también numerosas limitaciones y riesgos que continuarán

dificultando el desarrollo del proceso en 2026. En el plano interno, destacan obstáculos como las narrativas y enfoques contrapuestos; la escasa transparencia; la desconfianza entre las partes; los retrasos e inconcreciones en el ámbito político y social; el contexto de vulneraciones de derechos humanos, medidas represivas contra actores políticos y sociales kurdos y la persecución política y legal contra el principal partido opositor turco (CHP); la ambigüedad y cierta distancia del presidente de Türkiye hacia el proceso; la distancia tomada también por el CHP; la limitada participación y apropiación social; la falta de mecanismos de observación y verificación independientes, entre otros. Diversos analistas han asociado el proceso de paz a cálculos de poder de Erdogan, con la finalidad de atraerse apoyos kurdos para una próxima reforma constitucional que modificalo el límite actual de dos mandatos presidenciales y abrir así la puerta a que pueda volver a presentarse; y también a tratar de distanciar posibles alianzas opositoras entre el partido prokurdo DEM y el CHP. Se trata de obstáculos que continuarán estando presentes en 2026.

En clave regional, el proceso afronta graves riesgos relacionados con la cuestión kurda en Siria y las interrelaciones con el proceso en Türkiye. El Gobierno turco considera a las YPG/YPJ –principal fuerza armada kurda en Siria y que lidera la coalición de las SDF, apoyadas por EEUU en su lucha contra ISIS– una extensión del PKK y ha recelado y combatido durante años el establecimiento de una región autónoma kurda en Siria. Desde la caída de Al-Assad, y en medio de un convulso escenario regional, Ankara había aceptado las

negociaciones entre el nuevo Gobierno de transición sirio y las SDF, con mediación de EEUU, pero ha mantenido presencia militar y de inteligencia en el país y la presión política reclamando la disolución y desarme de las SDF. El año 2025 terminó sin que se implementase el acuerdo alcanzado en marzo de integración de las SDF en el Ejército sirio y a inicios de enero se desencadenaron graves hechos de violencia en distritos kurdos de Alepo (véase Siria en esta publicación). **Türkiye acusa al PKK de doble juego** y de acercamiento a Israel y a su política de fragmentación de Siria, mientras el **partido kurdo DEM** de Türkiye ha denunciado que se trata de ataques contra objetivos civiles kurdos y alerta de riesgos de masacres. Esta nueva crisis y la incertidumbre sobre el abordaje de la cuestión kurda en Siria tensionará el proceso en Türkiye. **Análisis** han señalado que el dossier de Siria podría ser el principal factor que influya en el proceso en Türkiye en 2026.

En conjunto, la iniciativa de diálogo en Türkiye entra en un año 2026 de oportunidad en que, tras una primera fase más focalizada en hitos relativos a seguridad militar y pasos del PKK, el proceso podría ampliarse con reformas legislativas y medidas más amplias. No obstante, concurren también graves obstáculos y factores de riesgo, locales y, de manera creciente, regionales. Con todo ello, se entra en una fase definitoria. Se requieren múltiples esfuerzos locales, regionales e internacionales, políticos y sociales, para consolidar y ampliar esta nueva oportunidad de abordaje en Türkiye del largo conflicto armado y de la histórica cuestión kurda.



El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 2803 que respalda el plan de Trump. Fuente: Naciones Unidas / Photo / Loey Felipe

ISRAEL – PALESTINA

El riesgo de normalizar (aún más) el genocidio, el apartheid y la vulneración del derecho internacional

Al finalizar 2025 la situación en Palestina continuaba siendo extremadamente crítica. La puesta en marcha del [plan de Donald Trump](#) a partir de octubre ha supuesto una reducción relativa respecto a los extraordinarios niveles de violencia registrados en los meses previos, pero no ofrecía ninguna perspectiva de [paz justa para Palestina](#). Por el contrario, la naturaleza del plan y las dinámicas que persisten amenazan con normalizar, aún más, el genocidio de Israel contra la población palestina, la falta de rendición de cuentas, las políticas de anexión y apartheid impuestas desde una lógica colonial y las vulneraciones al derecho internacional. Esta deriva no solo entraña riesgos para la población palestina, sino que también sienta peligrosos precedentes a nivel global.

La gravedad de la situación en Palestina resulta incontestable. Los datos ilustran por qué es considerada como el escenario con [mayor nivel de violencia política del mundo](#). [Más de 70.000 palestinos y palestinas han muerto](#) en Gaza a causa de la violencia israelí desde octubre de 2023 y hasta principios de 2026, según estimaciones oficiales que se consideran subestimadas –investigaciones y proyecciones que contemplan las muertes no registradas y las indirectas [elevan notablemente esta cifra y algunas incluso apuntan a un balance de 680.000](#) víctimas. A ello se suma que hay más de 170.000 personas heridas,

tres cuartos de la población de la Franja sometida a severos niveles de inseguridad alimentaria, el 80% de todas las infraestructuras de Gaza dañadas o destruidas y más de 637.000 niñas y niños palestinos sin acceso a la educación formal por tercer año consecutivo. Un número creciente de voces expertas, incluyendo la comisión internacional de investigación de la ONU, ha certificado que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina, y ha documentado los asesinatos, los daños físicos y mentales, la imposición de condiciones de vida calculadas para su destrucción como grupo y la adopción de medidas tendientes a evitar nacimientos entre la población palestina. Aunque a una escala menor, los niveles de violencia en Cisjordania también han empeorado significativamente. Los ataques de colonos y de las fuerzas militares israelíes se han intensificado en un clima de total impunidad y han provocado la muerte de más de un millar de palestinos desde octubre de 2023. Esta cifra representa el [43% de todas las muertes de palestinos y palestinas en Cisjordania en las últimas dos décadas](#) y una de cada cinco muertes correspondía a un menor de edad. En 2025 las acciones israelíes se han materializado en operaciones militares que han afectado principalmente a campos de personas refugiadas en Jenin y Tulkarem – forzando el desplazamiento forzado de 40.000 personas, el mayor desde 1967–, una intensificación de las barreras

y controles por toda Cisjordania, ataques de colonos a población y propiedades palestinas y en la destrucción de centenares de olivos, entre otras acciones. Paralelamente, el gobierno de Netanyahu ha ampliado las políticas de apropiación y ampliación de asentamientos ilegales en Cisjordania, acelerando un escenario de anexión de facto. La construcción y aprobación de asentamientos en 2025 fue la más alta desde que la ONU inició el seguimiento sistemático en 2017.

El plan de Trump

Desde octubre de 2025, el plan de 20 puntos de Trump ha pretendido fijar los términos del futuro de Palestina. La propuesta fue diseñada desde la lógica de la imposición y desde un alineamiento con los intereses de Israel, sin contar con voces palestinas. El plan fue presentado con grandilocuencia como un “acuerdo de paz histórico” y sin precedentes, como si fuera posible omitir que EEUU ha sido parte activa, que ha tenido en sus manos las herramientas para frenar el genocidio y que, por el contrario, ha optado por ofrecer a Israel la cobertura política y el apoyo militar necesario para que continuara con su ofensiva militar contra el pueblo palestino. El plan no ofrece ninguna garantía para la realización de los derechos colectivos palestinos, no hace referencia a una necesaria rendición de cuentas y no da cuenta del conjunto de violencias y opresiones que afectan a la población palestina. De hecho, la iniciativa se centra en Gaza y no alude a las realidades de Cisjordania o Jerusalén Este. Tampoco a la situación de la población refugiada palestina o a la de los palestinos y palestinas de 1948 (con ciudadanía israelí), que afrontan una situación de discriminación estructural. El enfoque del plan, por tanto, amenaza con acentuar la fragmentación de Palestina impuesta por Israel.

Hasta el momento, la implementación de la primera fase del plan ha llevado a una reducción de la violencia. Sin embargo, pese a la vigencia de un “cese el fuego” –que algunos análisis prefieren calificar como “menos fuego” (*lessfire* en vez de *ceasefire*)– las ofensivas de Israel han continuado cobrándose vidas palestinas (más de 400 hasta principios de 2026). Hamas ha entregado todos los rehenes, vivos y muertos, que mantenía en su poder (a excepción de uno) a cambio de la excarcelación de prisioneros palestinos e Israel ha replegado parcialmente sus fuerzas hasta la llamada “línea amarilla”, un nuevo límite impuesto en Gaza que supone que las fuerzas de Netanyahu mantienen el control de entre el 53% y el 58% del territorio de la Franja. La población gazatí, sometida a desplazamientos forzados una y otra vez en los últimos dos años, afronta por tanto peores condiciones de hacinamiento y una situación humanitaria que sigue siendo caracterizada como “catastrófica”. Aunque ha aumentado relativamente el flujo de ayuda para la

población palestina, ésta sigue siendo insuficiente. Israel ha continuado limitando el acceso de bienes y obstaculizando o bloqueando el trabajo de organizaciones humanitarias, incluyendo la UNRWA –históricamente, la agencia de la ONU clave en la asistencia a la población palestina. Es decir, sigue imponiendo condiciones de vida imposibles a la población palestina, con necesidades acentuadas ante la dureza del invierno.

La segunda fase del plan Trump –cuya implementación se encuentra en un estado incierto– queda retratada tanto por lo que establece como por sus omisiones y ambigüedades, ya que incluye provisiones rechazadas en el pasado tanto por Hamas como por Israel. El plan contempla el desmantelamiento de los arsenales de Hamas –el grupo estaría dispuesto a entregar sus armas “ofensivas”, pero no las que considera “defensivas”. Además, establece un

nuevo repliegue de las fuerzas israelíes que entregarían el control de la Franja a unas “Fuerzas de Estabilización Internacional” y la creación de un gobierno tecnocrático compuesto por figuras palestinas e internacionales bajo la supervisión del llamado “Consejo de Paz”, encabezado por el propio Trump. En algún momento que no se precisa, este Consejo de Paz –que supervisará temas políticos, de seguridad y también los relativos a la reconstrucción– cedería la administración a una Autoridad Palestina “reformada” –no se fijan los parámetros– y eventualmente, solo “si se dan las condiciones”, ello podría conducir a “un camino creíble para la autodeterminación y un Estado palestino”.

En la práctica, por tanto, el plan establece un modelo de control y tutela extranjeros que reedita una administración colonial para la Franja. No existe claridad sobre los poderes, composición o rendición de cuentas del Consejo de Paz. Solo se sabe que estará liderado por Trump e integrado por otras figuras internacionales, de las que solo ha trascendido el nombre del ex primer ministro británico Tony Blair. Tampoco hay total claridad sobre la forma que asumirá la fuerza internacional. Aunque se ha difundido que EEUU espera que comience a desplegarse a principios de 2026 y que reúna unos 20.000 o 30.000 efectivos, no se sabe qué países aportarán a su composición –EEUU ha buscado la colaboración de países como Azerbaiyán, Egipto, Indonesia, Qatar y Türkiye, aunque el gobierno israelí no estaría dispuesto a aceptar presencia militar turca en Gaza, por considerar a Türkiye un país muy próximo a Hamas y un rival regional. Tampoco se espera que el plan sea el marco para avanzar –más allá de la retórica– en las discusiones sobre la autodeterminación y estatalidad palestinas, teniendo en cuenta la vaga formulación de este punto en la propuesta, el férreo rechazo manifestado por el Gobierno de Netanyahu y la intención expresa de miembros de su gabinete de profundizar en políticas que impidan cualquier posibilidad de un Estado palestino –más aún, previsiblemente, considerando que 2026 es un año de elecciones en Israel.

La resolución 2803

De manera preocupante, el plan de Trump fue refrendado por el Consejo de Seguridad de la ONU a través de la aprobación, en noviembre, de la **resolución 2803** –por 13 votos a favor y dos abstenciones (China y Rusia). La medida causó **alarma y condena entre voces palestinas** y también estupefacción entre personas expertas por las serias vulneraciones al derecho internacional que entraña la propuesta. Figuras como la relatora especial de la ONU Francesca Albanese subrayaron que en vez de asegurar una vía para el fin de la ocupación y garantizar la protección de la población palestina, la resolución profundiza las asimetrías existentes, amenaza con consolidar el control externo sobre la gobernanza, fronteras, seguridad y reconstrucción de Gaza y **es contraria al derecho de autodeterminación**. Albanese ha insistido en que el mandato se focaliza sobre todo en el desarme de los grupos palestinos y no prevé acciones para abordar las raíces de la violencia: el asedio, la ocupación, la segregación racial y apartheid y la limpieza étnica llevadas a cabo por Israel. El abogado de derechos humanos y ex funcionario de la ONU Craig Mokhiber también ha expuesto que el objetivo de las tropas de la misión de estabilización –autorizada por el Consejo de Seguridad, pero que no será una misión de la ONU– será controlar, contener y desarmar a la población víctima del genocidio, no al régimen que

lo perpetra. Y ha advertido que cualquier apelación a “razones de seguridad” podrá servir para mantener la ocupación y tutela colonial por tiempo indefinido, a través de la habitual política israelí de hechos consumados. Mokhiber ha insistido también en que **la resolución rechaza implícitamente todos los pronunciamientos recientes de la Corte Internacional de Justicia**, como el que en julio de 2024 determinó la ilegalidad de la ocupación israelí y exigió su desmantelamiento. Por el contrario, la resolución extiende la ocupación y valida la presencia de fuerzas israelíes en Gaza, reforzando la impunidad de Israel a pesar de que el genocidio continúa. Paralelamente, el plan de Trump ha servido de excusa para que actores internacionales se desentiendan de sus obligaciones de actuar y perseguir el genocidio y, como en el caso de la UE, para **congelar las tímidas y tardías sanciones al gobierno de Netanyahu**.

Mientras continúan los debates sobre cómo poner en práctica el plan de Trump, existe un alto riesgo de que Gaza y Palestina vuelvan a salir del foco de la agenda internacional y mediática, que los nuevos niveles de violencia se normalicen, generen menor alarma y atención, y que todo ello contribuya, una vez más, a que se imponga un marco de “gestión del conflicto” de manera indefinida que silencie la cuestión palestina y a las voces de quienes exigen el fin del genocidio, la ocupación y el apartheid.



Familias evacúan Alepo ante la escalada de hostilidades. Fuente: UNOCHA/Ali Haj Suleiman

SIRIA

Retos de seguridad y gobernanza amenazan la transición en el país

Un año después del derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad, el balance de la situación en Siria obliga a un sinnúmero de matices. Las nuevas autoridades se han esforzado por reincorporar al país al escenario regional y global y han conseguido un levantamiento parcial de las sanciones que comprometían las posibilidades de recuperación de un país devastado tras más de una década de conflicto armado. Paralelamente, sin embargo, en el último año Siria también ha registrado altos niveles de violencia, graves episodios de enfrentamiento y masacres de cariz sectario, intervenciones foráneas y otros retos de seguridad que, junto a desafíos en materia de gobernanza, inclusión y justicia transicional, amenazan el proceso de transición y podrían desembocar en una mayor inestabilidad y en una escalada de la confrontación en 2026.

Tras expulsar del poder a al-Assad a finales de 2024, el hasta entonces líder del grupo armado opositor Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Ahmed al-Sharaa, se puso al frente de un gobierno de transición encargado de gestionar a un país fracturado por más de medio siglo de autoritarismo y 14 años de guerra que dejaron más de medio millón de muertes y millones de desplazados dentro y fuera del país. Pese a su trayectoria y vínculos con la filial de al-Qaeda en Siria, al-Sharaa ha logrado perfilarse de cara al exterior como interlocutor y opción válida para guiar al país en esta nueva etapa. Durante 2025, la estrategia internacional del nuevo gobierno le ha llevado a buscar

reconocimiento y apoyos en países árabes, europeos y, con la complicidad de Türkiye (uno de sus principales aliados), también en EEUU. La intervención de al-Sharaa en la Asamblea General de la ONU –la primera de un dirigente sirio en sesenta años– y la reunión con Donald Trump en el despacho Oval en noviembre han sido señalados como hitos de la rehabilitación de Siria en la escena internacional. Esta campaña exterior ha facilitado el levantamiento de sanciones contra él mismo y otros miembros de su gobierno por sus vínculos con grupos considerados terroristas y también ha pavimentado el camino para la progresiva remoción de sanciones contra Siria impuestas durante el régimen de al-Assad. Un tema vital teniendo en cuenta las ingentes necesidades de reconstrucción y que, como consecuencia del conflicto armado, el 90% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. **Análisis** indican que algunos servicios están mejorando y que existe un mayor margen para expresar la crítica a las autoridades. En este contexto, las expectativas sobre una nueva etapa política en Siria –y en algunos casos también presiones en los países de acogida– han alentado el retorno de un millón de personas refugiadas y según las previsiones **otro millón podría regresar durante 2026**.

La situación de violencia en el país ha cambiado sus dinámicas, pero sigue siendo muy preocupante. Algunos análisis han constatado una **disminución relativa en el número de eventos violentos en 2025** en comparación

con el año anterior en gran parte de Siria, aunque en paralelo se ha identificado un incremento significativo en algunas áreas. Los niveles de letalidad continúan siendo extraordinariamente altos y confirman que Siria aún es escenario de un conflicto armado de alta intensidad. El balance del *think tank* ACLED apunta a más de 7.900 víctimas mortales en 2025 –una cifra similar e incluso superior a la registrada en 2024 (7.116) según los datos del mismo centro–, en su mayoría civiles. La organización Syrian Network for Human Rights (SNHR), en tanto, había logrado documentar la muerte de más de 3.600 personas en 2025.

Focos de inestabilidad

Dos episodios de violencia destacaron en 2025 por su gravedad y repercusiones. En marzo, en Latakia y Tartous (costa), los enfrentamientos de grupos leales al antiguo régimen con las nuevas fuerzas de seguridad sirias y milicias afines –aunque no bajo su control– desembocaron en una masacre que adquirió tintes sectarios y afectó principalmente a la minoría alauí a la que pertenecía al-Assad y considerada afín al antiguo régimen. Más de 1.500 personas murieron en unos pocos días. Posteriormente, en julio, la intervención del Gobierno sirio para frenar los enfrentamientos entre población drusa y beduina en la provincia de Suweida (sur) también se caracterizó por la falta de disciplina de sus fuerzas y derivó en una escalada que causó la muerte de más de un millar de personas y el desplazamiento de otras 200.000, además de motivar nuevas acciones de Israel en territorio sirio bajo el argumento de proteger a los drusos. Estos dos episodios han profundizado las fracturas en la sociedad siria y la percepción en algunos sectores de que las nuevas autoridades –por incapacidad o falta de interés– no están protegiendo a toda la población siria en igualdad de condiciones. La sensación de amenaza se ha agudizado entre la comunidad alauí ante la falta de rendición de cuentas y nuevos episodios de violencia, alejando protestas y demandas de federalismo. Entre la población drusa, sectores previamente partidarios de integrarse o colaborar con el gobierno de transición ahora desconfían y respaldan reivindicaciones de autonomía y secesión.

A este panorama se suma la fragilidad y perspectivas de escalada de violencia en el noreste. En marzo de 2025 el gobierno de transición sirio y las fuerzas kurdas de las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF, por sus siglas en inglés) –que controlan un 25% del territorio sirio y cuentan con unos 70.000 efectivos– llegaron a un acuerdo para que las SDF se integraran en las nuevas fuerzas armadas sirias antes de finalizar el año. Sin embargo, las negociaciones para concretar el pacto –que han contado con la facilitación de EEUU– se bloquearon y en los últimos meses del año el deterioro de las relaciones se hizo evidente, con intercambios de acusaciones y enfrentamientos, principalmente en la zona de Alepo.

A finales de 2025 diversos análisis advertían sobre la fragilidad de la transición en la Siria post-Assad, que ha continuado siendo escenario de altos niveles de violencia

Hasta principios de enero de 2026 los choques habían dejado decenas de muertes y forzado el desplazamiento de más de 140.000 personas. Líderes kurdos de las SDF han exigido un Estado secular y descentralizado y han puesto en cuestión la capacidad de las nuevas autoridades sirias para garantizar la seguridad de las minorías. La experiencia de Suweida habría sido determinante para que las fuerzas kurdas decidieran mantener las armas para controlar la seguridad en sus áreas de influencia, ya que temen que si se desarman quedarán expuestos a ataques de grupos islamistas afines a Sharaa. El gobierno de transición considera que las SDF amenazan la unidad del Estado sirio y no es descartable que intente tomar control del noreste por la fuerza. En la evolución de este frente seguirá siendo clave la posición de Türkiye. Ankara, que considera a las fuerzas kurdas sirias como una extensión del PKK, ha acusado a las SDF de convertirse en el principal obstáculo para la paz y estabilidad en Siria y ha explicitado su disponibilidad a apoyar al gobierno de Damasco para consolidar su control territorial del país (Véase el caso de Türkiye en este informe).

ISIS también seguía activo en el país y algunos análisis indican que el grupo armado estaba consiguiendo reclutar a sectores descontentos con la posición pragmática asumida por al-Sharaa. Al finalizar 2025 ISIS reivindicó el primer ataque mortal contra fuerzas estadounidenses desde la caída de al-Assad y el más cruento desde 2019. Este hecho motivó una intensa ofensiva de represalia de EEUU contra presuntas posiciones del grupo en el este de Siria y alentó especulaciones sobre un eventual resurgimiento de ISIS. De cara a 2026, Washington podría tener que decidir si continúa apostando por las SDF como su principal aliado en la lucha contra ISIS en Siria o si se decanta por el gobierno de transición, con el que ha iniciado cooperación en temas de contraterrorismo. La posición de las fuerzas kurdas en Siria se verá muy condicionada por la decisión de Washington y también por la evolución del proceso de paz entre Türkiye y el PKK.

El factor israelí también es clave para el futuro de Siria. Después de atacar y desmantelar los arsenales sirios tras la caída de al-Assad a finales de 2024 y desconocer la vigencia del acuerdo que en 1974 estableció un área de separación entre Siria e Israel, el gobierno de Netanyahu ha ampliado la ocupación en el sur de Siria –en el territorio adyacente a los Altos del Golán– y ha lanzado periódicos ataques que han alcanzado incluso a Damasco. Durante 2025, Israel y Siria entablaron negociaciones bajo el auspicio de EEUU, pero los contactos no desembocaron en acuerdo y al finalizar 2025 estaban estancados. Siria demanda el repliegue de Israel a los límites establecidos por el acuerdo de 1974, pero Israel exige que se establezca una zona desmilitarizada desde Damasco hasta la anterior zona de separación. En 2026 Netanyahu podría continuar con su aproximación ofensiva en Siria como parte de sus ambiciones regionales, más aún si percibe que Türkiye aumenta su influencia en el país.

Inclusión y justicia

En paralelo, existen numerosos retos desde un punto de vista de gobernanza. Un año después de la caída de al-Assad, algunos análisis han constatado una creciente frustración en diversos sectores de la sociedad siria, incluso entre la población suní mayoritaria en el país que es su principal apoyo. Parte del desencanto está relacionado con la concentración del poder en torno a al-Sharaa y un estrecho grupo de colaboradores previamente vinculados a Hayat al-Sham. Las elecciones indirectas del Parlamento celebradas en octubre de 2025 no ampliaron los niveles de representatividad. La marginación ha sido notoria en el caso de las mujeres. Solo seis mujeres fueron escogidas en el Parlamento de 119 escaños –equivalentes al 4%, menos incluso que en la época de al-Assad (10-13%)– y en los cargos gubernamentales hay una presencia muy limitada de mujeres –solo una ministra en el gabinete. Activistas feministas han denunciado que a pesar de los discursos sobre empoderamiento y participación igualitaria, persiste la exclusión de las mujeres sirias de los espacios de decisión y una aproximación tokenística.

Teniendo en cuenta estos y otros elementos, al finalizar 2025 diversos análisis alertaban sobre la **fragilidad de la transición**, más estable en la superficie que en el fondo. Algunas voces apuntaban a que las **condiciones para**

una guerra civil aún persistían y advertían de los efectos de las presiones centrífugas internas y las influencias internacionales en el futuro del país. En 2026 el gobierno de al-Sharaa deberá gestionar este conjunto de retos y decidir si se hace eco de las recomendaciones que instan a Damasco a acelerar y profundizar en la reforma de las fuerzas de seguridad –integrando a los grupos armados aún operativos en el país e imponiéndoles disciplina– y adoptar medidas efectivas de rendición de cuentas. El gobierno de transición tiene el **reto de frenar los episodios de venganza y represalias** y asesinatos diarios, contribuir a un genuino proceso de justicia transicional que aborde los crímenes de la época de los al-Assad y de todas las partes en el marco del conflicto armado, y garantizar los derechos humanos de toda la población. Si no se abordan los déficits en materia de inclusión, también es probable que se acentúe el malestar y las fracturas en la sociedad siria. Algunos análisis también recomiendan a las autoridades sirias **no repetir los errores que han comprometido el destino de otros países** de la región: no institucionalizar el sectarismo, no imponer una visión fundamentalista del Islam y evitar la fragmentación territorial del país. En 2026 el curso de la Siria post-Assad estará determinado por la evolución de estas dinámicas y por la aún incierta proyección de intereses de actores regionales e internacionales en el país.



Esta publicación está sujeta a una licencia de Creative Commons. Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con fines comerciales, y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja la opinión de la ACCD ni de la Generalitat de Catalunya.